

LE MONDE el Diplôme
diplomatique

Argentina

Derrumbe neoliberal y proyecto nacional



Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno

Derrumbe neoliberal y proyecto nacional

Alfredo Eric Calcagno

Eric Calcagno

Sumario

Introducción. De qué hablamos cuando hablamos de crisis

Capítulo 1. La crisis esencial y la crisis histórica

I. La crisis esencial: civilización, nación y régimen político

1. Crisis de civilización
2. Crisis de Nación
3. Crisis de régimen político

II. La crisis histórica

1. Historia y teoría económica
2. Las distintas argentinas: agraria, industrial y rentístico-financiera

Capítulo 2. Anatomía y fisiología del modelo rentístico-financiero

1. La gran estafa
2. Las bases teóricas
3. Dirigentes y gurúes

4. Los ejes económicos del modelo

- La convertibilidad
- El ajuste estructural del FMI
- La deuda externa
- Las privatizaciones
- La apertura externa
- El ajuste fiscal

Capítulo 3. Los beneficiarios y los ejecutores

I. Quiénes se quedan con la renta

1. Los bancos y el sector financiero
2. Las empresas privatizadas
3. Las empresas petroleras

II. Los dueños y los gerentes

1. El gobierno de los dueños
2. La rapiña de los dueños
3. Cómo terminar con los dueños

Capítulo 4. Lo que no fue y lo que podría ser

I. Las oportunidades perdidas

1. La devaluación
2. La economía del endeudamiento

II. Lo que podría ser: la industrialización

1. Etapas industriales y regímenes políticos
2. Cómo reindustrializar ahora?
3. Una nueva modalidad productiva?
4. El escenario internacional

Capítulo 5. Bases para un plan alternativo

I. Y ahora qué?

II. La lucha contra los pésimos como guía de la acción política

1. Optimismo y pesimismo
2. La lucha contra lo pésimo
3. Conciencia social, voluntad política, poder político

III. Requisitos para encarar la lucha contra lo pésimo

1. Recuperación del Estado
2. Cambio de la economía
3. De dónde salen los recursos?

IV. Los pésimos a combatir

V. Tres reflexiones finales

Agradecemos los comentarios de Alfredo F. Calcagno, Cora M. de Calcagno, Félix Herrero, Aníbal Martínez Quijano y Nicole Moussa, quienes revisaron los originales y cuyas observaciones nos fueron de gran utilidad.

Introducción

De qué hablamos cuando hablamos de crisis

El país imposible de quebrar está en proceso de disolución nacional. La cuarta parte de los habitantes del "granero del mundo" no puede comprar alimentos; el 22% de los trabajadores está desocupado, con otro tanto subocupado; el país con la mayor industria de América Latina, que fabricaba centrales nucleares y turbinas sufrió un profundo proceso de desindustrialización; en política internacional, hemos degradado de las doctrinas Calvo y Drago de defensa de las soberanías nacionales hasta caer en la tesis de las relaciones carnales ... ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Es un desastre natural? ¿Está escrito en nuestro destino? ¿Qué podemos hacer?

Creemos que para entender lo sucedido tenemos que ejercitar una mirada que vaya más allá del naturalismo ("este país de m....") como del esencialismo ("los argentinos somos así"). No es la fatalidad de un accidente de tránsito, ni los errores de conducción explican todo; tampoco son indeseados "daños colaterales" de una política que dará sus frutos algún día. La magnitud de la catástrofe, las urgencias presentes, las acciones a emprender llaman a un trabajo que ponga el debate en su quicio y desarrolle un análisis histórico pertinente.

En este libro caracterizamos la actual crisis y procuramos desentrañar sus causas. Ello supone un análisis de la naturaleza del modelo rentístico financiero implantado en 1976 y una descripción de sus beneficiarios y ejecutores. Después señalamos cuáles son las oportunidades perdidas y las posibilidades de reconstrucción. Por último, para no confundir diagnóstico con autopsia, esbozamos las orientaciones básicas para un plan alternativo.

A nuestro juicio, la crisis del modelo a la que asistimos tiene dos manifestaciones fundamentales. La primera es la esencial, pues atañe al tipo de civilización, a la cuestión nacional y al sistema de relaciones sociales. La segunda es una crisis histórica, marcada por el agotamiento de un régimen político, entendido como el

modo de ejercer el poder que marca las formas de vivir, producir y distribuir autoridad y riqueza. En la historia, estos procesos suelen durar siglos; ahora los plazos son más cortos. El modelo rentístico financiero argentino, por ejemplo, que debía cambiar para siempre nuestra manera de pensar y de producir, nació, creció y agoniza en apenas un cuarto de siglo.

Es de aplicación la poesía de Borges: "El hombre ha muerto./ La barba no lo sabe./Crecen las uñas."¹ En otras palabras, el modelo económico colapsó, la clase política todavía no se ha dado por enterada y el *establishment* económico continúa con viejos y nuevos negocios; pero el modelo está por demás agotado. A lo que asistimos ahora es al encarnizamiento terapéutico y lucrativo de sus beneficiarios, sin que exista todavía el perfil político de un proyecto nacional que lo reemplace.

¹ Jorge Luis Borges, *La cifra, Diecisiete haiku, Obras Completas*, Emecé Editores, Buenos Aires, 1991, tomo III, pág. 336.

Capítulo 1

La crisis esencial y la crisis histórica

Una crisis es "un cambio rápido e involuntario, que puede revelarse como favorable o desfavorable, pero que es siempre difícil y casi siempre doloroso. Etimológicamente es el momento de la decisión o del juicio, digamos el momento decisivo: no es que decidamos acerca de una crisis, sino que nos obliga a decidirnos, o decide en nuestro lugar. ... Momentos de desequilibrio o de ruptura. Alguna cosa se está decidiendo sin nosotros; es urgente tomar una decisión, si se puede".

André Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, Presses Universitaires de France, Paris, 2001.

I

La crisis esencial: civilización, nación y régimen político

Como señalamos, la implosión del modelo neoliberal desnuda una crisis esencial con tres expresiones: crisis de civilización; crisis de nación; crisis de régimen. La democracia grita por contenido y llama a la política.

1. Crisis de civilización

A nivel mundial nos encontramos frente a una crisis de civilización. Las sociedades que duraron ayer, las que mejor duran hoy (esos países que llamamos desarrollados), tuvieron siempre un funcionamiento más o menos laxo, más o menos estricto pero siempre operativo en torno de cierto ordenamiento básico, referido a un determinado modo de razonar.

Tal como lo señala una corriente filosófica francesa que parte de Pascal,² en toda sociedad existen órdenes, cada uno de los cuales es el conjunto de

² Véase Pascal, *Pensées*, 460, 793 y 332 (Ed. Brunschvicg), primera edición en 1669; y André Comte-Sponville, *Valeur et vérité*, Presses Universitaires de France, Paris, 1995, págs. 211 y ss.

actividades a escala de la sociedad que tienden a un mismo fin. Son las categorías o niveles sobre los cuales se establece cualquier vida humana civilizada. Si se jerarquizan estos órdenes desde el punto de vista de los valores, el primero es el orden ético, que se vincula al sentido de la vida, a cómo vivir. El segundo orden es el moral, contesta a la pregunta ¿qué debo hacer?; plantea el problema del bien y del mal. El tercer orden es político y procura llevar al máximo la cantidad de poder. El cuarto orden es el económico, que trata de generar y captar la mayor cantidad de ganancias; es el ámbito del mercado.

Cada orden tiene su propia naturaleza y no reconoce límites internos. Por ejemplo, en ausencia de restricciones, en política se hará todo lo necesario para disponer del mayor poder posible, incluso mediante la represión o la desaparición de personas; de igual manera, en economía se cometerá cualquier explotación, tráfico ilegal o depredación del medio ambiente, con tal de aumentar las ganancias. Tal sería la situación si cada orden quedara librado a sí mismo: estaríamos en plena barbarie. Para que exista vida civilizada, el orden superior desde el punto de vista de los valores debe ponerle límites al orden inferior. El orden ético limitará al moral; el ético y el moral acotarán al político (por ejemplo, exigiendo el respeto a los derechos humanos); el ético, el moral y el político prohibirán actos al económico: tráfico de droga, depredación del medio ambiente, trato abusivo de la mano de obra.³

No es posible pretender que un orden funcione según las pautas de otro. Por ejemplo, que el orden económico tenga como finalidad propia el bien común en vez de ganar dinero; pero sí puede exigirse que en su acción no viole principios morales y políticos: que por ganar dinero depreda el medio ambiente, trafique droga o propague miseria. Para que esto no ocurra deben imponerse límites morales y políticos al orden económico.

¿Qué ocurre en la actualidad? Una de las mayores aberraciones que sufrimos es que en el régimen neoliberal el orden económico no acepta límites éticos, ni

³ André Comte Sponville, *op. cit.*, pág. 213.

morales, ni políticos. Peor aún: impone sus pautas de comportamiento al resto de los órdenes. Así, la corrupción es la implantación de la lógica de la ganancia – propia en el orden económico- al orden político. Este predominio del sector económico es una de las normas básicas del neoliberalismo, que ha adquirido carácter cultural en la Argentina. Las acciones de gobierno son funcionales al cumplimiento de las obligaciones económicas que importan al *establishment* internacional y local que hoy maneja a la Argentina. El principio rector es la rentabilidad del capital financiero, después viene la satisfacción de las demás necesidades. Terminar con esta aberración moral y política es el primer cambio a realizar. ⁴

2. Crisis de Nación

La teoría y la práctica neoliberales han denigrado el significado de la Nación. Sus adeptos sostienen que el creciente abandono y desapropiación de funciones del Estado nacional ha puesto fuera de época a las reivindicaciones nacionales, que los nacionalismos son la expresión de la xenofobia y del racismo. Las naciones –sostienen- han quedado atrapadas entre el localismo de las regiones y la globalización mundial (expresada por las empresas transnacionales, el comercio, las telecomunicaciones, las normas culturales y de consumo, entre otros); así, al jerarquizar a la Nación estaríamos en pleno anacronismo, sin chances para sustentar un proyecto. En tales condiciones, el nacionalista es en el mejor de los casos un nostálgico ingenuo y, en el peor, un energúmeno. Lo inocuo o dañino del nacionalismo –aseguran los neoliberales- depende de cómo se manifieste. Si lo hace en el terreno económico, traba el progreso que trae consigo la acción de las empresas transnacionales y la apertura a las importaciones, a la tecnología y a los movimientos de capital en general. En el terreno político puede generar tensiones con países vecinos y -lo que acaso es más grave- con los países dominantes, cuyas represalias podrían ser demoledoras. En síntesis -sostienen los neoliberales- en la época de la internacionalización de las sociedades, de la

⁴ Véase Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, *Para entender la política. Entre la ilusión de lo óptimo y la realidad de lo pésimo*, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 1999.

política y de la economía, los nacionalismos son absurdos; y además son nocivos, pues se oponen al progreso y pueden desencadenar las peores violencias.

No compartimos ese enfoque colonial. A nuestro juicio, la Nación es una fuerza constitutiva estructurante, al ser un valor compartido por un grupo humano con importantes referencias comunes, tales como la historia, la cultura y la pertenencia geográfica. El sentido nacional ha sido y es uno de los impulsos humanos más fuertes, que ha prevalecido sobre otros sentimientos de solidaridad y fidelidad.

El instinto de pertenencia inherente al nacionalismo tiene una dosis de solidaridad social que privilegia la homogeneidad social y la integración física nacional. El nacionalismo se manifiesta en relación al exterior frente a una opresión o una amenaza extranjera; hacia el interior, tiene una función integradora cuando un grupo es tratado como extranjero en su propia tierra. Otra distinción es la que planteaba Lamartine, del nacionalismo entendido como amor a la patria o como odio a los extranjeros; es posible tener uno sin el otro, lo que resulta en tipos opuestos de nacionalismos.

Por otra parte, el postulado que pretende la "desaparición" de las naciones es enmascarante. La desigualdad entre las naciones del Norte y del Sur desaparecería por inexistencia del objeto conflictivo: sin naciones, todos somos iguales ante el mercado. Como resultado concreto, los nacionales de los países más débiles quedarían desamparados frente a los poderosos, sean países o empresas, que sí ejercen sus políticas. El primer efecto de estas tesis consiste en dejar sin protección a amplios sectores de la vida nacional, en materias tan importantes como las políticas económicas, sociales y culturales. Atacan así valores importantes que no tienen que ver con el *homo economicus* y que son fundamentales para la vida social. En segundo lugar, mezcla y equivoca problemas y situaciones: existen varias formas de nacionalismo, que no pueden confundirse. No es correcto juzgar del mismo modo al nacionalismo integrador y al disociador, al popular y al oligárquico.

La insensatez histórica que enfrentan hoy varios países latinoamericanos, y en especial algunos sectores de la Argentina, es la falta de sentido nacional, que les hace practicar un nacionalismo divisor y xenófobo frente a los países débiles, en particular con la adopción de un discurso antiinmigratorio -que si no fuera grave, sería en extremo cómico-, combinado con una carencia de sentido nacional frente a las potencias mundiales. De tal modo y por dos caminos -la prepotencia con unos y la sumisión con otros- la identidad nacional se diluye.

En la actualidad, la ola neoliberal ha aislado a las naciones y debilitado su soberanía. Hoy, para que sobreviva la nación debemos rescatar fragmentos de la soberanía perdida, tanto en el plano político como en el económico. Cada país deberá recuperar su soberanía política y su capacidad de acción económica (por ejemplo, la aptitud para elaborar y ejecutar políticas, la calidad de regulador y empresario, el monopolio de la violencia legítima). Esta recuperación de soberanía no sólo atañe a la situación interna de los países. También puede reconstruirse y redimirse lo nacional a través de lo regional, con una política de integración en el Mercosur y a partir de él, en Sudamérica. Los emprendimientos conjuntos (del tipo de la vieja Comunidad Europea del Carbón y del Acero) podrían ser el instrumento de un renacimiento de la soberanía regional compartida.

La alternativa es la disolución en una globalización dominada por la especulación financiera, que no significa "ser Estados Unidos" sino ser nada. Sería la Argentina como *no man's land*, manejada por la especulación, el bandidaje y -cuando sea necesaria- la represión. Lo ocurrido en Rusia prueba, por desgracia, que el planteo de esta alternativa no es un desvarío. En el plano de la identidad nacional, tenemos la opción de ser latinoamericanos de aquí o "latinos" del primer mundo; es decir, de generar en Sudamérica una integración entre iguales, o entrar como extranjeros de cuarta categoría en el imperio americano. Acaso por primera vez en nuestra historia no existe un proyecto de país. Ahora sólo se trata de durar y de "zafar".

Ante la ausencia de “una cierta idea de la Argentina”, predominan los instintos individuales de sobrevivencia y de terror a la exclusión económica y social.

3. Crisis de régimen político

El neoliberalismo actual

La tercera crisis esencial es la del régimen político. Falla la articulación entre civilización, nación y política. El neoliberalismo transforma la política en una cuestión de gerencia: sólo se trata de administrar mejor lo mismo y nada es cuestionable. Una de las peores prácticas impuestas por el neoliberalismo dominante es el escamoteo de las discusiones de fondo y el consiguiente vacío de la agenda política.

No está más en discusión cuál es el proyecto de país deseable o al menos el diseño de sus orientaciones generales, mediante qué mecanismos podría lograrse, cómo se impedirá el deterioro, qué puede hacerse para mejorar la situación, qué beneficios y cargas obtendrá o soportará cada grupo social. En esta materia hay una gama de opiniones y de intereses contrapuestos que fundamentarían distintas políticas económicas y que, en consecuencia, enriquecerían la agenda política. Pero ese debate sustancial no existe. Para ello, se eleva a la categoría de objetivos a los que son sólo instrumentos. Así, no se toman como metas la homogeneidad social, la eliminación de la pobreza, la industrialización del país o la autonomía nacional para decidir su futuro. Se presenta como objetivos supremos lo que en rigor son instrumentos o metas macroeconómicas, tales como el equilibrio fiscal y de comercio exterior, las aperturas comercial y financiera externas, las privatizaciones y la eliminación de la legislación que establece los derechos laborales.

De este modo se obtienen dos resultados: primero, no hay cuestionamiento de los instrumentos, elevados a la categoría de objetivos (que hay que cumplir y no discutir); segundo, evacúan del esquema a los verdaderos objetivos, que

desaparecen del temario. De esa manera no hay nada sobre qué reflexionar o polemizar. La política económica aplicada, luego de eliminar del debate objetivos e instrumentos, es la única posible. La agenda tiene un solo punto: cuál es la mejor forma de obedecer al mercado, según los supuestos y en el marco conceptual neoliberal.

Cambio en la estructura del poder político

Un requisito para salir de la crisis es un cambio en la estructura del poder político, que haga posible que el Estado se transforme en un instrumento apto para gobernar a la sociedad y para combatir a los males que nos agobian.

Es en esa perspectiva que el debilitamiento del Estado es una catástrofe. Entonces: ¿cómo proceder? ¿cuáles son las condiciones necesarias para que el Estado pueda ser el eje de la construcción nacional? ¿cómo pueden articularse civilización, Nación y política? Aquí sólo se trata de esbozar algunas pistas que nos parecen útiles para revertir la decadencia neoliberal actual y avanzar en la construcción de un proyecto nacional.

La primera pista es de orden filosófico. No deben considerarse los problemas como una serie de hechos inconexos, sin relación de causa a efecto, ni tampoco como un complot urdido en el secreto; es necesario retomar las categorías básicas que fundan a la vida en sociedad –la moral, la política y la economía–, jerarquizarlas de nuevo, para articular de manera coherente la teoría y la práctica.

La segunda pista indica una doble necesidad. Ante todo, se requiere un cambio en la naturaleza de las fuerzas políticas y económicas que controlan el Estado y estructuran a la sociedad; después, es esencial una transformación de la organización del Estado, de modo que pueda cumplir con sus funciones necesarias. Como la Constitución que lo funda y estructura, el Estado es un resultado de las relaciones de poder existentes, a la vez que un instrumento para

determinar a qué grupos sociales serán favorecidos en prioridad: si serán los trabajadores, subempleados y desempleados, o bien los grandes negocios, transnacionalizados y financieros. En el fondo, de eso trata la política. En otras palabras, es indispensable un fortalecimiento del Estado en ciertas actividades; y las áreas de las que se retira y en las que el interés general esté comprometido deberán ser ocupadas por la sociedad en su conjunto y no por grupos de presión.

La tercera pista es una invitación a la irreverencia. En los procesos de dominación, más importante que la violencia, real o simbólica que ejerce el dominador, el elemento determinante es el consentimiento del dominado.⁶ No hablamos de una irreverencia procaz, sin destino, extremista, sino más bien de una irreverencia rigurosa y metódica. Acaso aquellos preceptos que se presentan como indiscutibles, no sean más que falsas tablas de la ley, y de poco sirven los verdaderos mandamientos si no se los practica de manera permanente.

Expresada en abstracto, una transformación del poder político parece una meta de muy difícil cumplimiento; pero en la Argentina de hoy puede estar más cercana de lo que imaginamos. La falta de solidez política y la precariedad económica son dos taras, pero a la vez abren posibilidades: no se enfrenta un sistema consolidado y de apariencia inamovible. Así, una alteración en la estructura del poder político puede arrastrar una transformación económica. Este es el punto de quiebre: nos encontramos ante la alternativa de profundizar el régimen neoliberal o abrir un camino político de reformas profundas.

El problema es político. Una política económica, ante todo, favorece o perjudica a grupos sociales específicos. Con el modelo neoliberal el sector hegemónico es el financiero; y las mayores empresas, extranjeras y nacionales, manejan la política económica y concentran riqueza en su favor. No es que el Estado no se anime a adoptar medidas a favor de la población, sino que el gobierno, conducido por el *establishment* dicta la política que conviene a sus intereses; actúan así porque el gobierno son ellos.

⁶ Maurice Godelier, *L'idéal et le matériel*, Fayard, Paris, 1984, pág. 23.

Frente a esta situación, preconizamos otro modelo, que distribuya mejor la riqueza y el ingreso, industrialice y practique una política nacional independiente. Significa cambios de rumbo y de grupo dominante, con rechazo total de la contrarrevolución⁷ neoliberal.

Hoy la cuestión decisiva es qué política va a regir a la economía. No es cierto que las respuestas a las urgencias habiliten el campo para construir después una sociedad mejor. Los pasos más inmediatos en las soluciones de emergencia que se adoptan -por ejemplo, los ajustes- marcan un determinado recorrido.

II

La crisis histórica

Para entender la realidad es necesario colocarla en una perspectiva histórica, distinguir las etapas del desarrollo nacional y ubicar la fase actual.

1. Historia y teoría económica

Es interesante observar que cada momento histórico estuvo acompañado por una teoría económica: la época colonial nos remite al mercantilismo de los siglos XVII y XVIII, cuando la tesorización de oro y plata eran percibidos como el sustento del poder por las potencias europeas; así se desarrolla el actual norte argentino como proveedor de servicios para el Alto Perú, así se otorga importancia a Buenos Aires como puerto de salida. Era la política de España, potencia colonial. En la independencia aparecen los fisiócratas (Belgrano traduce a Quesnay): la fuente de la riqueza está en la tierra, y es la cobertura ideológica para estructurar un país en torno a la pampa húmeda. Para comprender la Argentina del siglo XIX nos ayuda David Ricardo y sus estudios sobre la renta de la tierra, su teoría del

⁷ Hasta hace algunas décadas se llamaba "contrarrevolucionarios" a aquellos que se oponían a las revoluciones de tipo socialista, inspiradas por la de 1917 en Rusia. Hoy cabe más llamar "contrarrevolucionarios" a aquellos que se oponen a los principios de la Revolución Francesa de 1789 en lo global y a la de Mayo de 1810 en lo local.

comercio internacional y del equilibrio automático de la balanza de pagos. El país será el de las vacas y las mieses, puesto que no llegan a nuestra tierra los impulsos manufactureros del mejor Smith, ni los escritos intervencionistas *avant la lettre* de Malthus, pese a la articulación privilegiada con el Imperio Británico.

A esa formación histórico-social anclada en la explotación y exportación agraria, sólida como los alambrados en la pampa, no la detuvo nada, ni siquiera los escritos industrializantes de Mariano Fraguero, inspirado en Friedrich List. El Centenario ve el poderío de la Argentina y el boato de los festejos tapa la realidad descrita por Bialek Massé.⁸ Esta singular dualidad se desbarra con tres graves crisis: la gran guerra, la crisis del 29, la segunda guerra mundial. Tres sucesos que cortan el cordón umbilical, mezcla de sustento material e ideológico, que nos une con las fuerzas internacionales dominantes.

Aparece en los años 30 un tímido proceso industrializador, hijo de la necesidad más que designio político. Sin embargo, es el comienzo de la Argentina industrial, que se desarrolla con plenitud a partir de 1946 y dura hasta 1976. Es la época de la sustitución de importaciones, fácil y luego difícil; es el tiempo del peronismo y el desarrollismo. Las ideas son otras: el esquema cepalino identifica a la heterogeneidad estructural como la causa de los males de América Latina, con los estratos sociales divididos por niveles de productividad. Allí donde el mundo desarrollado, con Keynes, vio la urgencia del Estado para combatir el desempleo, Prebisch reconoció que la producción y difusión del progreso técnico permite concretar sociedades con mejores empleos y mayores salarios. ¿Nuestros "treinta gloriosos años"?

2. Las distintas argentinas: agraria, industrial y rentístico-financiera

⁸ Juan Bialek Massé, *Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas a comienzos del siglo*, Buenos Aires, 1904.

A grandes rasgos, en nuestra historia existieron una Argentina agraria, que va desde 1880 hasta 1946; otra industrial, de 1946 hasta 1976; y una tercera rentístico financiera, que nos rige desde 1976.

La generación de 1880 fundó un nuevo país sobre la base de la explotación agropecuaria y su incorporación al comercio mundial como dependencia del Imperio Británico. Sus rasgos sobresalientes fueron el establecimiento de una educación primaria y la promoción de una inmigración masivas; se construyó una infraestructura de ferrocarriles, de puertos y de silos. Apareció entonces un mercado interno sin el cual el impulso dado por el mercado externo no hubiera producido los efectos multiplicadores que sostuvieron el crecimiento económico. Al mismo tiempo, surgieron nuevas pautas culturales, políticas y sociales.

Hacia 1930 este modelo agrario comenzó a debilitarse y surgió el industrial, cuyo predominio fue consolidado desde 1946; el mercado interno rigió entonces el modo de producir, consumir y distribuir. Pasamos de la economía agraria a la sustitución de importaciones, con hegemonía del sector industrial, mayor justicia social, migraciones internas y renovación casi total de la elite política. Duró, con vicisitudes varias, hasta 1976. Ese año, el gobierno militar de Videla-Martínez de Hoz implantó el modelo neoliberal rentístico financiero.

Las principales características de ese modelo fueron: endeudamiento creciente del Estado, dependencia de Estados Unidos, redistribución de ingresos adversa a los asalariados, liberalización del sistema financiero, apertura externa comercial y financiera, además de una política antinflacionaria basada en la sobrevaluación de la moneda nacional. Tales medidas fueron eficientes para destruir el esquema de crecimiento de posguerra, pero no para establecer uno nuevo; de allí su naturaleza parasitaria, ya que no podía sobrevivir más que con endeudamiento externo.

Este modelo llevó al país a la desestructuración del aparato productivo y al sobreendeudamiento externo e interno. Una vez cumplida la brutal represión

(1976-1982) y rotos los lazos sociales con las hiperinflaciones (1989 y 1991), se avanzó sobre terreno devastado. Ya no eran necesarios los generales golpistas y los tanques. Bastaba con las transferencias financieras, los sobornos y la propaganda. Cuando el modelo se sintió amenazado dio golpes de mercado, frente a una dirigencia política en su mayoría cobarde o cómplice.

Las consecuencias del modelo rentístico financiero implantado en 1976 fueron desastrosas. En el plano político se perdió la soberanía nacional junto con la desarticulación del Estado; se liquidaron las empresas públicas, la corrupción fue sistemática. En lo económico y social, el producto interno bruto por habitante (a precios constantes) es en 2002 inferior en 12% al existente en 1975; la desocupación abierta, que en 1976 era del 4,5% de la población económicamente activa, ahora llega al 23%; el sector industrial en 1976 generaba el 31,7% del producto bruto interno y en 2000 el 16,1%; hay 20 millones de pobres (el 51,4% de la población total), de los cuales 9,6 millones son indigentes (no alcanzan a cubrir los gastos de alimentación).⁹

La pobreza e indigencia impacta en los desocupados pero también alcanza a los asalariados, que tienen hoy sus más bajos ingresos de los últimos 50 años; el reajuste de salarios fue mínimo y los precios al consumidor crecieron 41% durante 2002, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sin embargo, para los grupos de menores ingresos esta suba fue más elevada, dado el mayor crecimiento relativo de los precios de la canasta básica de productos esenciales;¹⁰ esta situación de miseria afecta a 3,3 millones de asalariados, que constituyen la mitad de los trabajadores del sector privado, que no alcanzan a comprar una canasta básica de alimentos para una familia tipo;¹¹

⁹ Los datos de pobreza e indigencia son de Presidencia de la Nación, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), *Deuda social para erradicar la pobreza y la indigencia*. (www.siempro.gov.ar/default2.htm). Las cifras de la participación de la industria en el PIB dan un orden de magnitud pero no son estrictamente comparables pues se basan en cuentas nacionales con diferentes años-base.

¹⁰ Véase Artemio López, de Consultora Equis, en *Clarín*, Buenos Aires, 6 de junio de 2002.

¹¹ Ismael Bermúdez, en *Clarín*, Buenos Aires, 24 de mayo de 2002, sobre datos de la Consultora Equis y del INDEC.

como si esto fuera poco, el 40% de esos trabajadores “está en negro”, con lo que no tiene acceso a los beneficios sociales (véase el cuadro 4). Esta es la catástrofe social que provocó el modelo de renta financiera, que destruyó gran parte del sistema productivo, devastó la industria, multiplicó la desocupación, deterioró los salarios reales, redujo la inversión, cerró el crédito interno y externo. ¿Esto fue el “milagro argentino” pregonado por el establishment?

Un análisis económico de largo plazo tampoco deja mucho espacio para la fiesta financiera. Los resultados económicos de los tres modelos, medidos por el producto por habitante, muestran que la Argentina agraria (1890-1945) creció al 1,29% anual; la industrial (1946-1976) al 2,10%; y la rentístico financiera (1976 hasta 2000), al 0,24%. Estos datos figuran en el trabajo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) realizado por Angus Maddison hasta 1994,¹² completados por cifras de la CEPAL hasta 2000.

Frente a este panorama, al gobierno y a los economistas del *establishment* lo único que se les ocurre es seguir con el endeudamiento externo -que imploran con desesperación-, para lo cual cumplen con el programa de ajuste dictado por el FMI, que impide la reactivación. Cuando el FMI no acepta acordar, esperan hasta que surja algún entendimiento.

Lo que le sucede a la Argentina es digno de un cuento de terror de Edgar Allan Poe. Hay uno que cuadra a la perfección. En *El extraño caso del Sr. Waldemar*, Poe relata cómo una persona es hipnotizada momentos antes de la muerte. Así posterga la descomposición del cuerpo y conserva la facultad de hablar: en un cadáver, la voz daba impresión de vida. Al menos durante un tiempo, porque al cesar la hipnosis la descomposición es inmediata.

Capítulo 2

¹² Angus Maddison, *L'économie mondiale, 1820-1992, Analyse et statistiques*, OCDE, París, 1995.

Anatomía y fisiología del modelo rentístico financiero

*La función crea el órgano.
Claude Bernard*

1. La gran estafa

El proyecto de país inaugurado a mediados de los setenta, cuyos efectos provocaron la masiva reacción social de diciembre de 2001, fue en realidad una gran estafa. Fue un sistema económico, un régimen político y una regulación social novedosos en la Argentina, impuestos de manera dictatorial, conservados bajo formas democráticas; tiene, sin embargo, un defecto estructural, que es su propia inviabilidad, así como una característica permanente: sus beneficiarios lo proclaman como inevitable. La caída del gobierno de la Alianza abrió la posibilidad de variar el rumbo, pero hasta ahora no se abandonó el modelo rentístico financiero, que aprovecha cuanta oportunidad de negocio nuevo se presenta.

Esta gran estafa comenzó con el rodrigazo de 1975 y la ley de entidades financieras de 1977. De ese modo empezó la transición sangrienta de la economía industrial argentina al sistema de renta financiera que rige hasta nuestros días. Este cambio sustantivo de la economía argentina está en la base de los desastres del presente y no data de los gobiernos de Menem o De la Rúa, que no hicieron sino profundizarlo. El cambio violento impuesto en la acumulación, producción y distribución económica es de mediano plazo y supera en mucho las anécdotas electorales.

Esta nueva modalidad de funcionamiento de la economía adolecía de dos problemas. El primero era el pecado original: la sangre y la violencia generalizada que se emplearon para romper los mecanismos económicos anteriores y las fuerzas sociales que lo sustentaban. El segundo radica en su inviabilidad estructural, puesto que destruye el motor del desarrollo existente sin

reemplazarlo. De allí la avidez por conseguir fondos extranjeros como condición de supervivencia, a la vez que fuente de brillantes negocios personales y reaseguro del poder. Por eso el momento cumbre de este modelo fue la convertibilidad. Por fin encontraban un modo de gerenciar la economía que no necesitara de dictaduras. Hasta tenía aceptación popular. No hacía falta la represión; bastaba con el recuerdo de la hiperinflación reciente para borrar cualquier veleidad social y predicar la resignación hasta como dato político. En la década de 1990 la política económica estuvo signada por el ancla cambiaria, la apertura irrestricta a las importaciones y el endeudamiento, hasta que se agotó el acceso al financiamiento nuevo. Como durante el Proceso: plata dulce, recesión, derrumbe.

Pero esta vez el ajado tejido social permitió más y mayores negocios. La acumulación del modelo rentístico financiero aprovechó el excedente económico generado por los restos industriales, y confiscó las rentas de servicios públicos, las rentas de los recursos naturales, mientras desarrollaba un sistema bancario usurario. El resultado está a la vista: destrucción del Estado nacional, desarticulación del sistema productivo, marginación de la mitad de la población.

Este régimen se basó en el endeudamiento financiero sin límites como proyecto económico y en la docilidad social como requisito político. Para ello estructuró una clase política a su imagen y semejanza a través de la corrupción generalizada.

2. Las bases teóricas

Una de las más graves derrotas de la Razón, para parafrasear el título de una obra célebre, es la llegada y dominación del pensamiento neoliberal en economía. Estamos en presencia de una imagen del mundo que no se circunscribe a la economía, sino que da una visión sistemática de todas las actividades humanas imaginables, desde la ética, la moral, la política... y hasta la misma economía,

que se encuentran hoy gangrenadas por aquello que llamamos pensamiento único y que no parece ser más que la versión *aggiornada* de un fascismo *fashion*.

Es un pensamiento simplista, pobre en lo conceptual, patético en la argumentación: es el neoliberalismo. Es una perversión del pensamiento liberal clásico, aquel que unió desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX a autores que van de Smith a Rousseau, de Stuart Mill a Disraeli. Pensamiento rico y complejo, que funda la modernidad política en los movimientos revolucionarios que debían llevar a las burguesías al mando de sus sociedades. Es el pensamiento del capitalismo, nacido de la observación y la participación en los hechos más importantes de su época (Revoluciones francesa, reformas inglesas, para citar algunos casos).

Por el contrario, el neoliberalismo nace del esfuerzo persistente y continuo de algunas empresas que financiaron "tanques de pensamiento". Heritage Foundation y el Cato Institute, en Estados Unidos, son algunas de las fieles muestras que durante los decenios keynesianos que conocieron allá, había un "núcleo duro" de intelectuales bien pagados que redujeron el acervo liberal a una serie de dogmas y slogans. Nacía una nueva religión, un moderno paganismo. De allí salieron los batallones de funcionarios y decisores que encararon la "Revolución Conservadora" de Ronald Reagan. Corresponde a la etapa actual del capitalismo.

Debe recordarse que los estudios clásicos sobre el capital financiero ponen el énfasis en su articulación con el industrial (recordemos la obra clásica de Hilferding).¹³ Esto ocurría en los tiempos del capitalismo industrial. Ahora, en plena globalización, el capital financiero prescinde de la producción, se instala por cuenta propia y se convierte en hegemónico; maneja los mercados financieros y de comercio exterior, es determinante en la fijación de la tasa de interés y el tipo

¹³ Rudolf Hilferding, *El capital financiero*, Ed. Tecnos, Madrid, 1973 (edición original: Viena, 1910).

de cambio e influye cada vez más en el poder político. Este capitalismo es el que manda hoy en la Argentina.

Aquí, el neoliberalismo llegó de la mano de convenios, algunos de vieja data, entre universidades privadas argentinas y aquellos centros norteamericanos. Uno de los propósitos fue contrarrestar a la CEPAL, que en esa época era el "think tank" de la alternativa económica frente al modelo funcional a los intereses de los países capitalistas más desarrollados y los establishment locales tradicionales. Eran los tiempos de Raúl Prebisch y la teoría del centro-periferia, de Aníbal Pinto y los estudios sobre heterogeneidad estructural, todos con eje en la industrialización e integración de América Latina, en vez de su inclusión subordinada en la nueva división internacional del trabajo. Esa escuela de pensamiento y de acción fue reemplazada por los llamados "Chicago Boys". Ganaron su mote al protagonizar las políticas económicas de las dictaduras latinoamericanas, en especial en Argentina bajo Martínez de Hoz durante el gobierno militar, donde pudieron desarrollar sin límites su estilo propio. El huevo de la serpiente rindió su buena cría. Llegaron con la certidumbre de tener razón, en cualquier circunstancia y bajo cualquier condición; más que sesudos estudiosos, o simples pensadores, asistimos al desembarco de una secta. Un slogan: la sociedad de mercado. Todo aquello que se oponga es poco digno de interés, nada serio, por el sólo hecho de oponerse: si la duda es la jactancia de los intelectuales, entonces no piensan demasiado. Se agruparon, como sus pares del norte, en diferentes instituciones, también financiadas por empresas privadas (algunas de ellas, hasta industriales...): Fundación Mediterránea, CEMA, FIEL, entre otras.

No actúan como una corriente de pensamiento que recibe y devuelve críticas. Se trata de una institución ideológica que recuerda los peores aspectos de la Inquisición. Si el enemigo es réprobo, entonces todo está permitido, desde la desaparición forzada de personas, que estos sutiles pensadores "no pudieron ver", hasta el deterioro del Estado (que alcanzaron con creces). Volvemos al medioevo: una guerra santa, una cruzada, autoriza todos los excesos. El hecho

de negar la condición humana es lo que permite la aniquilación del adversario; el hecho de negar legitimidad para el disenso es lo que caracteriza al pensamiento único y lo sitúa como uno de los ejemplos más inadvertidos y más eficaces del totalitarismo ideológico.

Ya suena a crítica fácil, a lugar común, señalar que los neoliberales argentinos, tan prendidos de la platónica idea de libertad, suelen llegar al poder de la mano de golpes militares. Tuvieron la tarea histórica de cobrar, a cuenta y cargo del *establishment* argentino, lo que según ellos fueron las décadas de populismo irresponsable que el electoralismo produjo desde 1916. Menos común y más triste es darse cuenta que la trayectoria de estas personas es de una coherencia absoluta: los encontramos en cualquier gobierno que se aleje de las necesidades nacionales. Es el famoso "elenco estable".

3. Dirigentes y gurúes

Este "elenco estable" alimentó a la dirigencia política argentina carente de proyecto o de ideas para recuperar a la economía nacional. Hace tiempo que abdicó esa función esencial de la cosa pública para dejarla en manos de funcionarios de segunda línea del Fondo Monetario Internacional -de esos que sólo repiten las habituales recetas de estabilización y exportación de materias primas, sin tomar en cuenta la historia y realidad de los países- y en las de expertos de fundaciones privadas locales, que defienden los intereses del sector financiero con la bendición de los llamados "gurúes", que repiten incansables los dichos que esperan escuchar sus financiadores.

Es importante destacar la actitud de muchos decisores económicos durante el último decenio. Pasmados de emoción frente a la convertibilidad otorgaron al patrón dólar rango de horizonte insuperable, ignorando las catástrofes engendradas 70 años atrás por el patrón oro, entre otras la crisis de 1929. Atar la moneda a un elemento mítico, ya sea metal o divisa extranjera rememora los clichés de la sólida argentina agroexportadora, la aventura de la navegación a

vela, el encanto de las lámparas de aceite; la redención a través del sufrimiento, pero nos embarca en la desconocimiento de la realidad social y la ignorancia de los mecanismos económicos básicos.

Otro párrafo merecen los "gurúes". Personalidades variopintas, henchidas de arrogancia, hicieron publicidad de sus propias consultoras para predicar las ideas del neoliberalismo, cobrando caros los lugares comunes adaptados a la realidad argentina. Rosarios de anécdotas, de gruesos errores en los vaticinios y de predicciones *ex post* de hechos evidentes, cuando no amenazas de infierno y perdición para quien se aparte de la senda marcada por el *establishment*. ¿Y si los hechos toman otro camino? Entonces la realidad está equivocada. La rentabilidad del pensamiento ante todo... Estos personajes hablan ahora en términos de "hechos de la naturaleza", para explicar lo sucedido en diciembre de 2001 por un malhumor pasajero de las masas argentinas, de algunos inadaptados que se llevaron electrodomésticos y no comida (diferencian el "buen" saqueo del "mal" saqueo), o fijan en la lentitud del ex Presidente o el malhumor del huido Ministro de Economía la causa de los males.

Esta no es una mera descripción entomológica. Del razonamiento expuesto por estos grupos accesorios pero necesarios para copar las instituciones en nombre del *establishment*, surge la variedad de las políticas posibles, los temas de la política social que privilegiaron, los ejes del modelo neoliberal.

4. Los ejes económicos del modelo

Veamos ahora el significado de los ejes económicos del modelo rentístico financiero: la convertibilidad, el ajuste estructural del FMI, la deuda externa, las privatizaciones y la apertura externa.

La convertibilidad

La convertibilidad fue un mecanismo contra la lucha antinflacionaria basado en la libre conversión de pesos a dólares, en la emisión monetaria del Banco Central sólo contra aumento en las reservas, en la congelación del tipo de cambio, en la apertura comercial externa y en la libre entrada de capitales. Excedía en mucho el significado corriente de una caja de conversión, que sólo establece la posibilidad de cambiar la moneda nacional por otra extranjera.

Su funcionamiento está estrechamente ligado al financiamiento externo. En el sistema de tipo de cambio fijo y de apertura comercial y financiera sin restricciones, las importaciones aumentaban más que las exportaciones; de tal modo, el crecimiento de la economía quedaba asociado a los capitales externos que cubrían el déficit de la balanza comercial y, más aún, de la cuenta corriente de la balanza de pagos¹⁴. Si las importaciones caían, también bajaba el producto (como ocurrió durante el efecto tequila); por lo tanto, el sistema no podía funcionar si no entraba de modo permanente un chorro de capitales. Tanto el endeudamiento externo como la inversión extranjera directa generaban un pago de servicios, cuyo financiamiento no fue el resultado de mayores exportaciones (el tipo de cambio no las favorecía, y mucha de la inversión extranjera fue a servicios y otros sectores que no exportan), sino en más deuda o más inversión extranjera. Así creció la bola de nieve, hasta la implosión cuando no hubo más préstamos externos. Entonces, la economía basada en el endeudamiento colapsó. Es el momento del derrumbe.

Asimismo, había un compromiso de no emisión de base monetaria más allá de una cierta proporción de las reservas internacionales, cercana a la relación de 1 dólar en las reservas contra 1 peso de base monetaria.¹⁵ Esto no equivalía a decir

¹⁴ El saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos surge del saldo comercial (exportaciones menos importaciones de bienes y servicios reales) más el saldo de los servicios financieros (intereses y utilidades cobrados menos los pagados) y las transferencias.

¹⁵ Se establecía así una restricción a la función del Banco Central como prestamista en última instancia del sistema financiero local y para financiar al sector público; en la práctica, se permite contabilizar como reservas a los títulos públicos emitidos por el Estado argentino

que todos los agregados monetarios en poder del público (que incluyen los depósitos a interés en los bancos y son mucho mayores que la base monetaria) estuvieran respaldados; pero era conveniente que la gente que tenía dinero en los bancos así lo creyera. Si hubieran sabido que en caso de crisis "no alcanzaría para todos", los movimientos de pánico podían haber provocado o acentuado esa situación de crisis.

Los depositantes ignoraron esa realidad hasta que quedaron atrapados en el "corralito". Sin embargo, las cifras eran contundentes: los 80.000 millones de depósitos en plazo fijo, caja de ahorros y cuenta corriente no podían cubrirse con reservas que oscilaban en torno a los 20.000 millones. Cuando se descubrió la realidad, los bancos, que son responsables por los depósitos que recibieron y re prestaron, quisieron hacer creer que el problema era entre los depositantes y el gobierno.

La convertibilidad atravesó diferentes etapas y tomó distintos significados. Lo mismo suele suceder con las palabras. Las etapas de la convertibilidad corresponden, por un extraño azar (¿un signo del destino?) a las mismas acepciones que la palabra griega "fármaco". En griego, el "fármaco" expresa cuatro acciones diferentes: usar remedios, hacer operaciones mágicas, administrar una purga y dar un veneno. Todo se expresa con el mismo término y su sentido depende de las circunstancias, de los propósitos, de las dosis y del "imaginario". Pero las épocas y los lugares cambian. Un análisis filológico que se aplique a la Argentina del decenio de 1990 mostraría, primero, que para enunciar esas ideas, en lugar de "fármaco" debe decirse "convertibilidad"; y segundo, que sus significados no son simultáneos sino que se escalonan en el tiempo. Veamos.

Primero se aplicó el remedio. En 1991, ante al horror de la hiperinflación, la convertibilidad fue un medicamento exitoso: trajo la estabilidad de precios, objetivo que a principios del decenio parecía inalcanzable. Dadas las circunstancias

denominados en dólares en cartera del Banco Central hasta el 20% de las reservas totales; después se amplió esa proporción al 30%.

económicas, existió estabilidad con crecimiento económico y la enorme afluencia de capital externo permitió entrar en la etapa siguiente de encantamiento y euforia. Fue el remedio.

En ese momento, la convertibilidad era la solución mágica, que solucionaría todos los problemas futuros. Tenía el atractivo de ser simple y automática. Parecía que no había que pagar costos; se la proclamó como la gran solución permanente y se intentó exportarla. Fue el encantamiento.

Pero a partir de la crisis del tequila, en 1995, comenzaron los inconvenientes. Frente a esta situación, a los economistas neoliberales, después de profundos estudios y análisis econométricos, sólo se les ocurre utilizar la única terapia que empleaban los médicos de Molière: cualquiera sea la enfermedad, lo que corresponde es aplicar purgas y sangrías (con respecto a estas últimas, sufrimos un ávido elenco de sanguijuelas); por otra transposición histórica de palabras, ahora a las purgas y sangrías se les llama ajuste. Por supuesto, no importa que el enfermo esté anémico. Fueron y son las purgas.

Dentro del mismo proceso se llega a la última fase de la convertibilidad. Ahora el remedio ya actuó, el encantamiento terminó, las purgas están haciendo efecto y así se llegó a la etapa final, que culmina a fines de 2001. Es el veneno: recesión, deflación, caída del poder de compra de la población, crisis de sobrevaluación del peso, aumento de la pobreza y la exclusión. Retorna la vieja frase de Keynes: en economía se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias. Después de la catástrofe vinieron las oportunidades perdidas, que se reseñan en el capítulo 4.

En la actualidad, la convertibilidad ya no existe; pero fue determinante de la actual configuración de la economía y de los grupos hegemónicos. Todavía sufrimos sus secuelas, tanto mentales como económicas.

Recuadro 1

La dolarización

La apología de la convertibilidad fue por años el eje del discurso del pensamiento único en la Argentina. El derrumbe de la convertibilidad no fue motivo suficiente para admitir los errores de análisis ni reconocer las contradicciones internas de ese régimen. Por el contrario, atribuyen su fracaso a errores en su instrumentación y, sobre todo, a no haber ido lo bastante lejos en la renuncia a la moneda nacional. La medida que se debería haber tomado, en la óptica del sector más recalcitrante del *establishment* local, era la dolarización. Más aún, el menemismo aún la pregona.

La dolarización quiere decir que un país adopta el dólar como unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor, y hace desaparecer la moneda nacional. Sus defensores plantean que al eliminarse el riesgo de devaluación, se generaría una mayor confianza, aumentarían los depósitos y préstamos bancarios y disminuirían las tasas de interés. También se ha afirmado que se pondría fin de manera definitiva a la inflación. Esto último se ha visto desmentido en la experiencia reciente del Ecuador. Tampoco la dolarización elimina los problemas que llevaron al colapso de la convertibilidad: no garantiza que vaya a haber un excedente estructural y permanente de la balanza de pagos, ni que el sistema bancario local podrá prescindir de un prestamista en última instancia. Suprimir un instrumento, como lo es la posibilidad de tener una política monetaria y una cambiaria, no nos asegura que no lo vayamos a necesitar en el futuro. Rara vez los problemas se resuelven ignorándolos.

Frente a las magras y discutibles ventajas de la dolarización, sus inconvenientes son enormes e irrefutables. Una rápida enumeración muestra los siguientes perjuicios:

1. Desaparición del prestamista en última instancia. El país quedaría inerte frente a cualquier crisis financiera. En tal caso, al desaparecer el prestamista en última instancia se arrastraría a la quiebra al sistema bancario. El Banco Central no produce

dólares y la Reserva Federal de Estados Unidos no está dispuesta a reemplazarlo para sostener al sistema bancario argentino.

2. *Subordinación de la política económica al sector externo.* En una economía dolarizada, es esencial tener un excedente estructural en la balanza de pagos para no caer en una depresión crónica y para que no haga implosión el sistema bancario. Son indispensables un gran dinamismo de las exportaciones, nuevas inversiones extranjeras y acceso al crédito externo. Ninguna de estas condiciones se cumple en la Argentina. Dolarizar en estas condiciones significa profundizar la depresión.

3. *Distorsión de los precios relativos.* Una de las mayores calamidades que se abatió sobre el sistema productivo de Argentina y de otros países que recurrieron a un "ancla cambiaria" para frenar la inflación, fue la marcada distorsión de sus precios relativos, que afectó a los sectores exportadores o que enfrentan la competencia de productos importados. En ningún caso se pudo corregir esa distorsión sin devaluar la moneda, lo que no es posible en una economía dolarizada.

4. *Necesidad de usar las reservas para comprar nuevo circulante.* Una dolarización obliga a proveer de dólares, que será el nuevo circulante. De tal modo, deberán destinarse alrededor de 5.000 millones de dólares para comprarlos a la Reserva Federal de Estados Unidos y canjear la base monetaria, que en la actualidad es de alrededor de 15.000 millones de pesos; ello significa a fines de 2002 la mitad de las reservas.

5. *Pérdida del señoreaje.* En los hechos, quien tiene un billete le está dando un préstamo sin interés al gobierno que lo emitió. Esta pérdida de señoreaje, producto de la desaparición de la moneda nacional y su reemplazo por otra extranjera, se calcula en 750 millones de dólares por año.

6. *Liquidación del Mercosur.* La dolarización significaría un golpe acaso definitivo contra el Mercosur. Se pierde toda posibilidad de coordinar políticas económicas con

nuestros principales socios comerciales y se entra en la órbita de Estados Unidos, con quien no tenemos intereses comerciales convergentes.

7. *Inconstitucionalidad.* Además de todos los inconvenientes económicos, la dolarización sería inconstitucional. En efecto, entre las obligaciones del Congreso Nacional (el art. 75 dice "corresponde al Congreso") figura la de emitir la moneda nacional, hacerla sellar y fijar su valor. Esta obligación –como todas las establecidas en el art. 75- no puede delegarse, y menos aún en un Estado extranjero. Una dolarización exigiría una reforma de la Constitución Nacional.

En síntesis, una dolarización agravaría, en vez de resolver, los problemas que mostró la convertibilidad. De ser posible (y ello sólo ocurriría si tuviéramos nuevamente acceso a abundante financiamiento externo), sólo daría lugar a otro ciclo de "plata dulce, recesión, derrumbe", sin duda más costoso por la quiebra generalizada del sistema bancario que generaría.

El ajuste estructural del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ejerce una influencia decisiva en el funcionamiento de la economía argentina. Ello, en violación de sus funciones originarias, que consisten en promover la cooperación monetaria internacional, facilitar el comercio, fomentar la estabilidad cambiaria, contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos, infundir confianza a los países miembros y aminorar el desequilibrio de las balanzas de pagos (art. 1º del Convenio Constitutivo). Como lo establece la letra del Convenio, ninguna de las atribuciones originales autoriza al FMI a intervenir en la política económica interna de los países miembros.

Sin embargo el FMI abandonó esos fines y siguió otra estrategia: sobre la base de una relación de fuerzas -la del acreedor frente al deudor insolvente-, la "comunidad financiera internacional" dicta a los países cómo extraer excedentes

fiscales y externos para "honrar sus obligaciones" (ajuste coyuntural); pero además decide cómo deben estructurar sus economías y sus sociedades, sin que tenga nada que ver con la deuda original ni con circunstanciales dificultades de pagos externos. Es el aprovechamiento de una crisis de la balanza de pagos para imponer el "ajuste estructural" (achicar el Estado, privatizar, restringir el gasto público y el crédito, abrir la economía a las mercaderías y capitales externos, flexibilizar el mercado laboral), que a su vez deriva cuantiosos recursos hacia el sector financiero internacional y local. Esta es la receta inconvencible del FMI, que se aplica en todas las circunstancias bajo todas las latitudes, incluso en los casos de recesión o depresión económica.

Impone condiciones para otorgar los préstamos (condicionalidades) que poco tienen que ver con las posibilidades del país deudor para pagar deuda. Es normal que un gerente de banco se informe acerca de los ingresos y gastos del futuro deudor; pero es inconcebible que además le exija que venda su casa y su auto baratos a un amigo de él, que mande a los chicos a tal o cual escuela y que se inmiscuya en su vida privada. Estas exigencias, transpuestas a una escala nacional son análogas a las que plantea el FMI en sus acuerdos *stand by*.

Además, la política concreta recomendada por el FMI es recesiva. Es un principio elemental de economía que para reactivar es necesario que la población compre bienes y servicios, para que compre debe disponer de los ingresos necesarios y una forma rápida de obtenerlos es por el efecto multiplicador del gasto público; pero esta verdad elemental es ignorada y el FMI insiste con los programas de ajuste.

¿Qué ocurrió en las negociaciones de Argentina con el FMI en 2001 y 2002? El gobierno argentino hasta enero de 2002 pretendía un préstamo de 20.000 o 30.000 millones de dólares; semanas después, se conformaba con los 9.000 millones no desembolsados del blindaje; ahora se da por satisfecho con una anotación contable que postergue los pagos al FMI y al Banco Mundial. Pero esta

operación puede hundirnos más aún en la recesión, porque incluye un programa de ajuste.

En el presupuesto nacional del 2002 aprobado por el Congreso se prevén pagos a los organismos financieros internacionales, que escapan así a la moratoria de la deuda; se computan 5.882 millones de dólares para intereses y 10.379 millones para amortizaciones. La lógica consecuencia es que el eventual desembolso del FMI y los créditos que entonces accedan a destrabar el Banco Mundial y el BID ni siquiera alcanzarán para pagarles a esos mismos organismos.

Bien mirado, el problema principal lo tiene el FMI, porque un incumplimiento de la Argentina empeorará la calificación de riesgo del Banco Mundial y encarecerá el costo de los préstamos que reciba. Ya se presentó un caso similar con Rusia en 1999. Ese país debía pagar 5.000 millones de dólares al FMI, sin los cuales haría extensiva al FMI la moratoria ya declarada con acreedores privados. El FMI salvó las apariencias prestando sólo ... 4.500 millones.

Esta política del FMI ha sido impugnada no sólo en los países subdesarrollados sino también en Estados Unidos. Una comisión del Congreso -la comisión Meltzer- integrada por economistas cercanos al actual gobierno de Estados Unidos, afirmó en su informe de mayoría que el FMI no responde al fin para el que fue creado, que era el de ser un prestamista de corto plazo para apoyar ajustes del balance de pagos. ¿Fue una política correcta? No, según este informe. Dice la Comisión: "La transformación del FMI en una fuente de préstamos condicionados de largo plazo ha empobrecido a las naciones dependientes del FMI de modo creciente y ha dado al FMI un grado de influencia sobre la política de los países miembros, que no tiene precedentes en las instituciones multilaterales. Algunos acuerdos entre el FMI y sus miembros especifican metas y requieren políticas como condiciones para la continuidad de los desembolsos. Estos programas no aseguraron el progreso económico. Han socavado la soberanía nacional y a menudo trabado el desarrollo de instituciones democráticas responsables que

pudieran corregir sus propios errores y adecuar los cambios a las condiciones externas.”¹⁶

Asimismo, las políticas impuestas a los países asiáticos en 1997-1998 suscitaron fortísimas críticas y el propio FMI terminó admitiendo que había sido un error imponer un ajuste fiscal en medio de la recesión; por desgracia, no parece aprender de sus errores.

La deuda externa

Durante el decenio de 1990, la política económica argentina giró en torno al pago de la deuda externa. El gobierno De la Rúa-Cavallo llegó al colmo de obligarse a pagar la deuda externa antes que cualquier otro gasto. La deuda externa argentina es un ejemplo mundial de expoliación. Su origen es el financiamiento de la evasión de capitales y la especulación, tanto que de haber aplicado tasas de interés normales su pago terminaba en 1988.¹⁷

Después, en la década de 1990, el endeudamiento fue el combustible que hizo funcionar la convertibilidad. En ninguno de los dos casos sirvió para impulsar la actividad productiva y capitalizar al país.

Un hecho notable es que, en la actualidad, gran parte de los bonos de la deuda externa argentina está en poder de residentes en el país. En marzo de 2001, el 43% de los bonos en moneda extranjera emitidos por el gobierno (38.227 millones de dólares sobre un total de 88.732 millones) eran de propiedad de residentes en la Argentina; y ese porcentaje aumentó sustancialmente con el

¹⁶ Véase Congreso de Estados Unidos, International Finance Institution Advisory Commission, *Commission Report*, Washington, 2000, págs. 28 y 30 (www.house.gov/jec/imf/imfpage.htm).

¹⁷ Véase Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, *La deuda externa explicada a todos (los que tienen que pagarla)*, Catálogos, Buenos Aires, 2002 (primera edición en 1999).

megacanje de junio de 2001, cuando se refinanciaron 29.477 millones de dólares, de los cuales un 73% fue tomado por residentes en la Argentina.¹⁸

Desde 1975, el aumento del monto de la deuda es impresionante: 7.875 millones de dólares en 1975, 45.087 millones en 1983, 58.588 millones en 1991 y 142.300 millones en 2001.¹⁹ Dentro de esta expansión general hubo dos tipos de deuda externa. El primero, el de la "deuda vieja", fue el del gobierno militar (1976-1983), que tuvo por objetivo financiar la evasión de capitales y hacer negocios financieros; de acuerdo con cifras del Banco Mundial, en el período 1976-1982, el 44% del endeudamiento se utilizó para financiar la evasión de capitales, el 33% para pagar los servicios de esa misma deuda y el 23% para importaciones no registradas.²⁰ El segundo comenzó en 1991 con el sistema de convertibilidad. Entonces, el endeudamiento fue la consecuencia de la obligación que imponía la convertibilidad de pagar todo déficit con ventas de activos o endeudamiento, y también del hecho que la convertibilidad fue incapaz de suprimir tales desequilibrios; al contrario, fueron en aumento.

De tal modo, el funcionamiento de la convertibilidad dependía de la entrada continua de capitales en montos brutos superiores a los 20.000 millones de dólares por año, para cubrir el déficit en la cuenta corriente del balance de pagos y las amortizaciones de la deuda. Cuando los capitales eran insuficientes, se ajustaba por recesión. Tal era el efecto directo de los cortes presupuestarios; así como en el sector externo era necesario reducir las importaciones. En ambos casos, disminuye el producto, la desocupación aumenta, la recesión se profundiza y cae la recaudación fiscal.

¹⁸ Ministerio de Economía, *Estimaciones trimestrales del balance de pagos y de activos y pasivos externos*, cuadro 14 (www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales).

¹⁹ Cifras del Ministerio de Economía de la Argentina.

²⁰ Banco Mundial, *Economic memorandum on Argentina*, Washington, D.C., 22 de junio de 1984, págs. 17 a 19.

Los pagos efectuados por la deuda externa son significativos: en 2001 salieron 12.086 millones de dólares por intereses.²¹ Las amortizaciones que se vencieron en 2001 son de 13.108 millones de dólares.²²

El efecto presupuestario del pago de intereses también es importante: en 2001 ascendió al 24% del total de gastos de la administración nacional, y si se excluyen los destinados a seguridad social se llega al 35%. Para que se advierta la magnitud de esta cifra basta con recordar que duplicó a todo el gasto en personal de la administración pública nacional.²³

¿Qué sucede cuando por simple inviabilidad económica terminan las posibilidades de endeudarse y acaba la mansedumbre social? El modelo se agota. Comienza entonces un período en el que cada grupo social dominante trata de gerenciar la crisis en provecho propio. A esto responde el espectáculo de los últimos años. La dirigencia política trata de embalsamar el modelo económico y creer que sobrevive. A su vez, el *establishment* económico, frente a la imposibilidad de continuar con los negocios anteriores, busca nuevas oportunidades a través de la comercialización de los despojos: desde principios de 2001 hasta diciembre de 2002 el Banco Central perdió reservas por 16.687 millones de dólares, pese al importante préstamo que recibió del FMI; se pasó de 26.908 millones al 31 diciembre de 2000 a 14.915 millones a fin de 2001 y a 10.221 millones en diciembre de 2002.²⁴

Otro dato significativo son los bienes que residentes argentinos tienen en el extranjero: en 1991 eran por valor de 50.010 millones de dólares, fueron de 93.000 millones en 2000 y llegaron a 106.368 millones en 2001. Entre 1992 y 2000 las transferencias al extranjero sumaron 56.467 millones de dólares y las propiedades de argentinos en el exterior aumentaron en 46.848 millones; en

²¹ Ministerio de Economía, Dirección Nacional de Cuentas Internacionales. Estimación del balance de pagos (cuadro resumen) (www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales).

²² Véase Ministerio de Economía, *Proyecto de presupuesto para 2002*.

²³ *Ibid.*

²⁴ Banco Central de la República Argentina (www.bcra.gov.ar), *Informe monetario diario*, varios números.

2001 salieron capitales netos por 15.686 millones de dólares y los bienes en el exterior de residentes en Argentina aumentaron en 12.510 millones.²⁵ Para quienes rigen la economía, es esencial reacomodarse para captar la renta nacional, aun por otros medios, con otras figuras, sin importar lo grotesco. Siguen al pie el precepto del Gatopardo: "cambiar algo para que nada cambie".

Por cierto, el arte del establishment es admirable: aun en los momentos más críticos, los beneficiarios del régimen sacan provecho. Hasta las peores situaciones les sirven para hacer negocios personales. En junio de 2001 la crisis impedía pagar los intereses de la deuda externa. Entonces, se pactó una refinanciación mediante el canje de bonos ("megacanje") que permite aumentar en 3 años la vida media de la cartera objeto del canje; pero, al mismo tiempo, se recargó el costo de la deuda en el período de 31 años en 55.281 millones de dólares.²⁶ Increíble pero real: son 55.281 millones de dólares. La voracidad de los acreedores de la deuda externa no tiene límites. Los bancos que armaron el megacanje cobraron comisiones por 147,5 millones de dólares; sobre los responsables del negocio deberá expedirse el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 2 de la Capital Federal.

La deuda externa no sólo tiene consecuencias financieras y económicas; también es un elemento político esencial, que influye a través de las condicionalidades incluidas en los acuerdos stand-by con el FMI, como señalamos en el punto anterior.

²⁵ Ministerio de Economía, Dirección Nacional de Cuentas Internacionales (www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales).

²⁶ El tema fue considerado por la Auditoría General de la Nación, que dictaminó que es lesivo para los intereses financieros del Estado argentino y envió los antecedentes al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n° 2. El cuadro síntesis de los pagos (en millones de dólares) es el siguiente:

	Capital	Intereses	Total
Proyecciones pre-canje	85.917,21	73.026,46	158.943,67
Proyecciones post-canje	102.633,47	111.620,10	214.253,57
Variaciones por megacanje	16.692,74	38.588,29	55.281,04

Fuente: Auditoría General de la Nación, *Informe sobre canje de deuda pública del 19 de junio de 2001*, Buenos Aires, 19 de marzo de 2002.

En síntesis, durante el reinado rentístico financiero, la deuda externa tuvo la función política fundamental de permitir la continuidad del modelo económico, transferir enormes ganancias a los acreedores financieros y apuntalar la hegemonía de los grupos dominantes.

Recuadro 2

La naturaleza política de la deuda externa

La deuda externa ha sido siempre y es un problema político. Primero, en la historia argentina han confrontado siempre los defensores del interés nacional y los entregadores de la soberanía; segundo, la deuda ha servido para la instalación y la consolidación de grupos políticos y económicos hegemónicos; tercero, mediante la deuda se ha efectuado una enorme transferencia de ingresos hacia los acreedores, sobre todo a favor del *establishment* económico extranjero y local; cuarto, la deuda externa requiere y funciona con corrupción a gran escala.

Una operación de préstamo, que en teoría consiste en la utilización de ahorro externo para fines de desarrollo nacional, en los hechos fue una especulación financiera que vació al país, condicionó su política, consolidó a los gobernantes y los enriqueció, junto con los especuladores extranjeros y nacionales.

Cada grupo hegemónico interno ha estado vinculado -o subordinado- a una potencia extranjera predominante, que hasta la Segunda Guerra Mundial era Gran Bretaña y desde entonces es Estados Unidos. La deuda externa es el instrumento de regulación o de extorsión en esas relaciones. En una etapa prevalecían los conflictos entre los adictos a las potencias dominantes (en nuestro caso, Gran Bretaña y Estados Unidos); así, se financiaba a los secuaces y se hostilizaba a los adversarios; cuando los amigos llegaban al gobierno se los apoyaba y convertía en socios. En otra etapa, se promovían golpes militares, durante los cuales se compartía gobierno y negocios. Una tercera fase es la de los golpes de mercado, en los que ya interviene de modo directo el poder financiero, mediante el otorgamiento o la negación de préstamos externos.

Así, la deuda externa es una garantía para la continuidad de la política económica que conviene a los acreedores. Esto se logra con facilidad. Primero se infla la deuda a montos tales que no se pueden pagar. Entonces es necesario seguir recibiendo préstamos para cancelar los intereses. Esos préstamos se otorgan si se cumple con la política que quieren los acreedores. Los detalles de esta política se inscriben en los acuerdos *stand-by* con el FMI, que no desembolsa si no se cumplen. Luego, hay que obedecer. Así de simple. De tal modo, el FMI utiliza a la deuda externa como el principal instrumento de su influencia sobre los países. No sólo por lo que presta directamente, sino porque su "luz verde" es requisito indispensable para el acceso de otros préstamos o inversiones externas. Cumple así con su función de liderazgo del grupo rentístico local que ejerce el poder, sin preocupación por los procesos electorales.

La deuda externa aparece entonces como el instrumento privilegiado que sirvió para la implantación y la reproducción en el tiempo del modelo de renta financiera. La élite local modelo 1976 se generó o consolidó en ese momento, gracias a las suficientes disponibilidades de liquidez necesarias para comenzar el proceso especulativo. Quienes durante el gobierno militar contrajeron deuda externa y se la hicieron pagar al Estado, son los mismos que en 2002 lucraron con la pesificación a las grandes empresas. Ahora ha quedado en evidencia el *establishment* financiero liderado por el FMI, en complicidad con la banca trasnacional y privada nacional. Ellos ejercen el poder económico y mandan en la política; vaciaron el país y dictan leyes. No se trata del FMI perverso contra la Nación Argentina, sino de la connivencia del FMI, la banca extranjera, los propietarios o concesionarios de servicios públicos privatizados y los explotadores de recursos naturales, tanto nacionales como extranjeros, por una parte; y por la otra, la población argentina, cliente cautivo de los servicios públicos privatizados, esquilados por el sector financiero, acotados en los márgenes de maniobra políticos.

Las privatizaciones

Una de las principales recetas del FMI y del *establishment* local e internacional consistió en la privatización de las empresas públicas. Aquí también hubo plena coincidencia con los neoliberales nativos y en la Argentina se cometió el mayor proceso privatizador de América Latina. Entre 1990 y 1999 los ingresos por privatizaciones fueron de 29.985 millones de dólares.²⁷ En el capítulo 3 analizamos quiénes se quedan con la renta; es notoria la enorme diferencia de rentabilidad entre las empresas privatizadas y el resto, donde juega más el abuso de posición dominante que la eficiencia y eficacia en el gerenciamiento empresarial o en la retribución por la calidad del servicio prestado.

Este proceso de privatizaciones se realizó en medio de fuertes sospechas de corrupción. Por ejemplo, en las cuentas presentadas con motivo de la privatización de Aerolíneas Argentinas figuraban 77,8 millones de dólares como “gastos asociados con la compra”, sin especificación alguna. Conociendo los “usos y costumbres” de la época es fácil presumir el verdadero origen y destino de estos gastos. Acaso tales comisiones fueron, en realidad, el principal motivo para enajenar el patrimonio de los argentinos.

Como consecuencia de la desaparición de las empresas públicas (que antes de las privatizaciones generaban más del 10% del producto bruto interno) asistimos a un cambio en la estructura de poder interno. En efecto, los compradores de empresas privatizadas integran la elite del poder económico e influyen de modo decisivo en el poder político. Pensemos en el valor estratégico y en la magnitud de las recaudaciones de los principales servicios públicos (por ejemplo las telecomunicaciones), o en la importancia de algunos bancos, la siderurgia, la energía, los ferrocarriles y el petróleo. Sus dueños y gerentes, en el plano macroeconómico manejan sectores clave de la economía. En aspectos microeconómicos, esas cajas son las mayores del país. Dado el sistema de

²⁷ Véanse Banco Mundial, *Global Development Finance, 2001*, apéndice 4, Washington, 2001; y Sistema Económico Latinoamericano (SELA), *Inversiones extranjeras directas en América Latina y el Caribe*, Caracas, 2001.

financiamiento de los partidos políticos, los enormes costos de "hacer política" (o de comprarla hecha), la ausencia de acciones del tipo de *mani puliti*, así como la posibilidad de provocar golpes de mercado, podemos suponer que su influencia en el poder político es y será cada vez mayor, en especial cuando se trata de preservar posiciones o generar nuevos negociados en tiempos de crisis. Asimismo, las privatizaciones han sido en muchos casos la vía de entrada de empresas extranjeras, públicas y privadas.²⁸

Al mismo tiempo, el rol del Estado sufrió cambios estructurales con las privatizaciones. En teoría, o al menos así proclamaron las autoridades, deja de ser productor para adoptar una función reguladora. Surgen entonces dos problemas. El primero consiste en determinar en qué medida esta pérdida de funciones es compatible con sus tareas esenciales de proveer bienes públicos, definir y administrar los desequilibrios, promover o realizar la acumulación de capital, armonizar los intereses particulares, así como fijar la estrategia de mediano y largo plazo. La segunda cuestión se relaciona con la posibilidad de funcionamiento de un régimen democrático -acaso con el avance de la democracia representativa a la participativa- cuando el sistema político real se desliza hacia la plutocracia.²⁹

Esta operación económica y política se realizó en conjunto por el *establishment* económico local y el FMI, que a través de los acuerdos *stand by* exigió que se ejecutara un proceso de privatizaciones.

La apertura externa

Otra exigencia del FMI y del *establishment* es la apertura externa, es decir la libre circulación de bienes, servicios y capitales, tanto por el lado de las exportaciones como de las importaciones; por supuesto, los países desarrollados no quieren oír hablar de libre circulación de personas.

²⁸ Véase Alfredo Eric Calcagno y Alfredo Fernando Calcagno, *El Universo neoliberal. Recuento de sus lugares comunes*, Alianza Editorial, Buenos Aires, 1995, pág. 341.

²⁹ *Ibid.*, págs. 341 y 342.

Esta política es otra muestra de la conjunción entre el FMI y el sector financiero que actúa en la Argentina (que en su mayor parte ya es extranjero). De este modo el sector financiero obtiene la hegemonía en la economía argentina, en perjuicio del sector industrial. Existió una doble maniobra. Por un lado, se mantuvo la estabilidad de los precios internos mediante importaciones que resultaban muy baratas debido al tipo de cambio; por el otro se liberaron de modo indiscriminado las importaciones. Así, el sector industrial, que tenía dificultades para competir "mano a mano", no resistió la subvención a las importaciones que resultaba de una sobrevaluación del peso en 40 o 50%. La consecuencia fue que en 1976 el sector industrial generaba el 32% del PBI y en 1998 ese porcentaje se redujo al 17%. El cierre de industrias provocó una desocupación creciente, que -como señalamos- llevó el índice de desempleo urbano abierto de 3,7% en 1975 y 2,6% en 1980, a 7,4% en 1990, a 17,5% en 1995 y a 23% en 2002.³⁰

El ajuste fiscal

Para los economistas del *establishment* económico y financiero argentino, sumisos egresados de segunda línea de facultades de economía estadounidenses, no interesan más que dos problemas: el monetario y el fiscal. Ignoran al sector real de la economía. Existe así una gran coincidencia ideológica entre ellos y el FMI. Todos creen que el equilibrio presupuestario es fundamental para el correcto funcionamiento económico; y lo tratan de obtener -sin éxito- sobre todo mediante la restricción del gasto público no financiero³¹. Aplican este dogma en cualquier época, sea de recesión o de expansión: nos encontramos entonces en el peor de los mundos posibles, donde malos diagnósticos, provocados por estudios aproximativos de baja intensidad, llevan a políticas erradas, en las que el erario público es confundido con el bolsillo privado; además son aplicadas de modo incorrecto, por ignorancia absoluta de los mecanismos económicos básicos.

³⁰ Fuente: INDEC y CEPAL, *Anuario Estadístico*, varios números.

³¹ El gasto público no financiero es el conjunto del gasto corriente (salarios, bienes y servicios corrientes, jubilaciones, gastos de capital), excluido el servicio de la deuda pública.

No sólo son injustos, son limitados... Así entendemos el estricto criterio de caja: el gobierno paga sólo lo que se recauda. De tal modo, ante la caída de la recaudación y el aumento de la carga de intereses, en 2001 el gobierno rebajó en 13% los sueldos de la administración nacional y las jubilaciones mayores de 500 pesos.

Este método implantado por el gobierno De la Rúa-Cavallo no sirvió para pagar la deuda en dólares –como era su propósito- pero aumentó la recesión. En efecto: supongamos que gracias a la restricción en los gastos estuvieran los pesos para comprar los dólares y pagar los servicios de la deuda; el problema es que no se tienen los dólares, porque las exportaciones no alcanzan, el patrimonio nacional está vendido, los créditos externos cerrados y el Banco Central no puede fabricar dólares.

De esa manera, aun si se consiguiera el déficit cero tampoco se podría pagar la deuda (además, en los hechos el déficit aumentó). En los últimos años, los dólares faltantes ingresaron como endeudamiento externo del sector público. Por otra parte, la propia estrategia para eliminar el déficit es equivocada: si se trata de reducir el déficit recortando salarios y jubilaciones, el efecto es recesivo, lo cual a su vez disminuye la recaudación y agrava el déficit

Recuadro 3

El mito de las inversiones extranjeras

El esquema económico del *establishment* postula un axioma: las inversiones directas extranjeras son determinantes y fundamentales para el crecimiento. Veamos si los hechos confirman o desvirtúan esta afirmación.

Si la inversión extranjera ha sido o no el motor del desarrollo argentino, es el tema de una vieja polémica histórica. El hecho real es que fue abundante en algunos períodos y escaso en otros; en 1913 era el 48% del capital fijo total, se redujo al

20% en 1940, al 15% en 1945 y al 5% en 1954.³² ¿Cuál fue su importancia en el decenio de 1990? El cuadro 1 la reseña.

Cuadro 1
Argentina: Inversión extranjera directa (IED), 1992-2001
(en millones de dólares)

	1992-98	1999	2000	2001	Total	%
Total inversión extranjera directa	39.866	23.986	11.657	3.206	78.715	100,0
Reinversión de utilidades	5.203	-144	1.548	-844	5.763	7,3
Aportes	11.844	4.116	3.178	2.785	21.923	27,8
Deuda con matrices y filiales	5.195	1.627	688	500	8.010	10,2
Cambios de manos	17.625	18.386	6.244	764	43.019	54,7
Para información:						
Utilidades y dividendos	16.956	2.212	2.521	1.649	23.338	
Producto interno bruto (PIB) a precios corrientes	1.615.934a/	283.523	284.204	268.697	2.452.358	
Inversión bruta interna	308.218a/	51.074	46.020	38.099	443.411	
Inversión extranjera directa / PIB	2,2% a/	8,4%	4,1%	1,2%		3,0%
Aportes de la inv. extr. dir./PIB	0,7% a/	1,4%	1,1%	1,0%		0,9%
Inversión extr. directa/Invers. bruta interna	11,5% a/	47,0%	25,3%	8,4%		16,7%
Aportes de la inv. extr. dir./Inversión bruta interna	3,7% a/	8,1%	6,9%	7,3%		4,8%

a/ Período 1993-1998.

Fuente: Argentina, Ministerio de Economía, para producto e inversión: www.mecon.gov.ar. Para inversión directa extranjera: www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales.

A primera vista, el ingreso de 78.715 millones de dólares parece una suma importante. Sin embargo, en cuanto se la analiza con algún detalle, queda al descubierto su verdadera naturaleza. En primer lugar, hay que discriminar en qué consistió esa entrada de capitales: el 55% no significó una ampliación de la capacidad productiva, sino cambio de manos de empresas ya existentes; además, hubo una deuda con casas matrices y filiales (10%) y reinversión de utilidades (7%). De tal modo, los aportes reales fueron del 28% de lo ingresado como inversión directa extranjera. (Véase el cuadro 1).

Analizemos algunos detalles. Primero, entre 1992 y 2001 entraron aportes por 21.923 millones de dólares y salieron utilidades y dividendos por una suma mayor: 23.338 millones. Segundo, los aportes reales de capitales fueron el 0,9% del

³² Véase CEPAL, *El desarrollo económico de la Argentina. Parte I. Los problemas y perspectivas del crecimiento económico argentino*, México, D.F., 1959, págs. 28 y 29.

producto interno bruto y el 4,8% de la inversión bruta interna. Con estos porcentajes parece absurdo basar la política económica en la entrada de capital extranjero. La realidad es que vinieron para comprar empresas en funcionamiento y en lo posible monopólicas, de gran rentabilidad, públicas y privadas; pero fuera de esas compras, de reinversión de utilidades y de endeudamiento con sus casas matrices, su aporte de capital al desarrollo nacional fue negativo. La contribución útil puede estar en la cesión de mercados o en aportes tecnológicos u organizativos, pero no es cierto que traigan fondos; además se suelen financiar en los mercados locales de capitales. De allí que surja una pregunta obvia: ¿de qué inversiones extranjeras nos están hablando?

Capítulo 3

Los beneficiarios y los ejecutores

"La operación de dar y tomar dinero a interés es inherente al crédito público. La ley no debe autorizarla entre particulares".

Mariano Fragueiro, Organización del crédito, Santiago de Chile, 1850.

*Lo que hace falta es empacar mucha moneda,
Vender el alma, rifar el corazón;*

tirar la poca decencia que te queda.

Plata, mucha plata ... y plata otra vez.

Enrique Santos Discépolo, Que vachaché

En el capítulo anterior enumeramos los diversos mecanismos económicos y financieros sobre los cuales nació y creció el modelo rentístico financiero; veamos ahora quiénes fueron los principales actores. Para ello, nada mejor que investigar quiénes captaron las rentas generadas.

I

Quiénes se quedan con la renta

De acuerdo con la definición clásica de Alfred Marshall entendemos la renta de los recursos naturales como el ingreso derivado de la propiedad de la tierra y de otros regalos libres de la naturaleza. Por extensión, aplicamos también esta definición a las ganancias extraordinarias derivadas de una posición dominante determinada por la propiedad o por el carácter monopólico de la actividad ejercida. La renta es diferente del beneficio empresario y del salario del trabajador. Es también diferente del interés del dinero cuando éste toma niveles normales, aunque es mediante mecanismos financieros, sobretasas y seguros de cambio cómo los sectores dominantes apropiaron en su beneficio grandes montos de renta.

No estamos frente a una cuestión menor. En los hechos, podemos distinguir los diferentes modelos económicos en las diferentes etapas históricas según los mecanismos de apropiación de la renta. Por ejemplo, la Argentina agraria perdió la hegemonía frente a la industrial, cuando en 1946 el Estado captó la renta proveniente de las exportaciones de cereales (a través del monopolio estatal de compra y de comercialización externa) y lo asignó al mejoramiento de la infraestructura y al desarrollo industrial.

Los beneficiarios y los gerentes del sistema de renta siempre han actuado en estrecha articulación con la economía de los países centrales, en donde cierran su ciclo de acumulación. Esta connivencia es operativa merced a las relaciones directas con los gobiernos y las fuerzas económicas de los países dominantes o a través de los organismos financieros internacionales. Los rentistas locales utilizan sus vínculos con los poderes externos para ampliar y consolidar sus ganancias. En el plano de las políticas económicas, las condicionalidades impuestas por el FMI son un catálogo de las medidas que los rentistas locales quieren aplicar; como en el ámbito local no tienen legitimidad para imponerlas, utilizan la autoridad del FMI.

Aclaremos que no se trata de actuar en contra de la actividad financiera, necesaria como subconjunto dentro de la estructura económica real, sino de colocar la actividad financiera en el lugar que debe tener, como propiciadora del crédito y de la producción, sin actuar de parásito ni convertirse en un fin en sí misma. Menos aún puede constituirse en la incubadora que genera la élite local. Una cosa es el beneficio empresario y la remuneración normal del capital, que en un capitalismo racional son respetables, y otra cosa es el abuso de consumidores cautivos, las comisiones financieras, las tasas de interés exorbitantes y la captación privada de la renta sobre recursos naturales que pertenecen a todos los argentinos, aquellos que nos precedieron, los actuales y los por nacer. La enajenación de esta renta es el más claro significado de la destrucción nacional, al romper la solidaridad entre las generaciones, así como el reaseguro más claro del poder del *establishment*.

Veamos algunos de los grupos económicos y financieros que generaron y se quedaron con la mayor parte de la renta.

1. Los bancos y el sector financiero

El sistema financiero es el eje fundamental del modelo. Estructurado por la dictadura militar (Videla-Martínez de Hoz, 1976-83), rigió hasta ahora sin cuestionamientos a su hegemonía. Su documento constitutivo es el decreto de entidades financieras de 1977, decisivo en la gigantesca redistribución regresiva del ingreso y en la organización de los nuevos grupos económicos. Desde entonces el país vivió al ritmo del endeudamiento externo.

En ese tipo de economía manda el sector financiero, cuyo botín fue y es extraordinario; los bancos obran como agentes activos. Ante todo, lucraron mediante sus actividades financieras normales -en especial con la diferencia entre la tasa de interés que pagan por el dinero que toman y lo que cobran por el que prestan- y con comisiones exorbitantes. En ciertos períodos, los plazos fijos a 30 días rendían 9,01% en promedio y el crédito se otorgaba al 17,5% (con estabilidad de precios). Esta es una diferencia notable, ya que el volumen de depósitos remunerados alcanzaba los 80.550 millones de pesos en todo el sistema y los movimientos en el mes significaban unos 3.600 millones.³³

El sector financiero también tuvo ganancias exorbitantes con sus negocios especiales, como las permanentes negociaciones de la deuda externa.

Además, el sistema financiero aprovechó sus conexiones internacionales para controlar aún más la política económica interna. No sólo nombraba ministros, sino que tenía en el FMI al aliado que se encargaba de imponer las políticas que le convenían. Su mayor esfuerzo se centra en el pago de la deuda externa de los

³³ Carlos Scavo, "Una globalización predatoria", *Le Monde Diplomatique*, edición Cono Sur, octubre de 2001.

países subdesarrollados, injusta coartada que le permite instrumentar una política a pedir del *establishment*. En este contexto, la Argentina debe obtener superávit fiscal para disponer de los pesos y es necesario exportar para tener los dólares. Si se interrumpen los pagos, dicen que el país verá cerrado por decenios el crédito internacional. En realidad, lo que Argentina necesita no es que traigan dinero, sino que no se lo lleven: durante 2001 se evadieron 15.686 millones de dólares a los que se suman otros 8.574 millones salidos entre enero y junio de 2002).³⁴ En el recuadro 3 mostramos cuál ha sido el aporte real del capital extranjero.

En el mediano plazo, los bancos quieren conservar poder y ganancias; en particular, que no se toque a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). En el corto plazo, aspiran a que el costo de la devaluación lo paguen otros. Por el momento, logran con holgura sus objetivos.

Además, este sector constituyó y manejó la mayor caja del país, que consiste en los recursos de las AFJP, de las que es dueño mayoritario. El Estado recibe los aportes personales previsionales, que son 11% de todas las remuneraciones pagadas, y los transfiere a las AFJP. Así es como entre 1998 y 2001, estos montos ascendieron a 4.200 millones de pesos anuales en promedio. Las AFJP cobran una comisión exorbitante del 30% de los aportes, con lo que se quedan con el 3,3% de los salarios; además, descuentan un seguro de vida (contratado en general con compañías controladas por ellos mismos). Como el Estado debe pagar las jubilaciones existentes, pero cuenta con menos recursos, existe un déficit fiscal del orden de los 4.000 millones de pesos anuales³⁵.

³⁴ Se trata de cifras oficiales del Ministerio de Economía. Las correspondientes a 2001 resultan de sumar los saldos del balance de pagos del sector privado no financiero (-12.265 millones de dólares) y errores y omisiones (-3.421 millones de dólares). La estimación para 2002 se basa en el informe del INDEC sobre el balance de pagos de los dos primeros trimestres de 2002 (www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales).

³⁵ Este es un claro ejemplo que las teorías económicas defendidas por los neoliberales, tales como el equilibrio presupuestario, tienen su límite cuando surge el interés individual de los propios neoliberales. La tentación es muy grande.

Para el Estado, el sistema significa un elevado costo fiscal y un endeudamiento creciente. Desde el punto de vista del aportante, todo indica que no obtendrá por esta vía una buena jubilación. Diversos cálculos muestran que durante los primeros seis años de funcionamiento del sistema, esto es, antes del colapso de la convertibilidad, una caja de ahorros bancaria rindió un 40% más que una cuenta de AFJP.³⁶ Desde el punto de vista del país, ni se desarrolló el mercado de capitales, ni aumentaron el ahorro y la inversión, como gustaban repetir Domingo Cavallo y los "gurúes" del establishment.

Mientras tanto, las AFJP, a agosto de 2002 manejaban 37.221 millones de pesos³⁷ al tiempo que cobraban altísimas comisiones por no hacer nada. Ni siquiera se ocupan del cobro de los aportes, como en Chile. En agosto de 2002 los afiliados a las AFJP en Argentina eran 9 millones de personas, de las cuales aportaban sólo 2,8 millones (¿qué ocurrirá con los 6,2 millones restantes cuando les llegue la edad de jubilarse?).³⁸

Recuadro 4

La batalla por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)

En los hechos, el manejo de los instrumentos de política económica propios de un banco central confiere gran parte del poder. Quien establece la tasa de interés, el tipo de cambio, el crédito y la emisión monetaria controla la base de los mecanismos económicos. Es un lugar estratégico, porque si no alcanza para ejecutar un programa económico, puede impedir la ejecución de políticas alternativas. De allí que la primera exigencia del FMI y de los grupos financieros internacionales y locales es la "independencia" del Banco Central, que significa su feudalización, con la creación de una nobleza financiera con justicia propia. Así lo demuestran el reclamo por inmunidad (modo elegante de decir impunidad) de sus directores y ejecutivos,

³⁶ Jorge Beinstein, "El saqueo de las jubilaciones", *Le Monde Diplomatique*, ed. Cono Sur, diciembre de 1999.

³⁷ Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP), *Memoria Trimestral*, n° 32, abril-junio de 2002, Buenos Aires, (www.safip.gov.ar/DOCS/mt_32.htm).

³⁸ *Ibid.*, *Boletín Estadístico Mensual*, agosto de 2002 (www.safip.gov.ar/DOCS/estc1.htm).

como la duración en los cargos. Por cierto, no se trata de una oscura conspiración, sino del ejercicio del poder que da el predominio financiero y de los medios para conservarlo. Voten, voten, que las autoridades del banco central no responden a ninguna legitimidad electoral. Como el sector financiero es hegemónico en esta etapa de la globalización, en los hechos ellos son los que gobiernan. Así de simple.

La Ley de Convertibilidad dejó casi sin atribuciones al Banco Central: a la caja de conversión le bastaba con el mercado y la voluntad del Ministro Cavallo. Durante su vigencia, el BCRA fue diligente vasallo del establishment financiero, y actuó en contra del interés nacional. No cumplió con su tarea elemental, que consiste en facilitar los medios para impulsar el proceso productivo. Apenas vigilaba el cumplimiento de algunos indicadores, mientras dejaba la economía real librada a las tropelías que cometían los bancos, en especial con sus tasas de interés usurarias y sus negocios de toda índole.

No sólo fue una política nefasta. Además, estuvo mal hecha desde el punto de vista "técnico". Veamos algunos ejemplos.

La primera aberración es la libertad total del movimiento de capitales. Ello provocó una enorme fuga de capitales.³⁹

El segundo error grueso es el régimen bimonetario aplicado. Es ruinoso recibir depósitos en dólares y prestarlos sin constituir las reservas necesarias o exigirles seguros de cambio a los depositantes. ¿De dónde iban a sacar después los dólares para devolverlos si se devaluaba? ¿Nadie pensaba? Los resultados están a la vista.

Un tercer desatino fue el tratamiento de privilegio otorgado a los bancos internacionales, lo cual llevó a una extranjerización de la actividad bancaria. El argumento era que un banco extranjero nunca cerraría y que de ser necesario recurriría a su casa matriz para reintegrar puntualmente los depósitos que recibían.

³⁹ Ministerio de Economía, Dirección Nacional de Cuentas Internacionales (www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales). Véase el capítulo 2, punto 4.

En septiembre de 2002, sobre un total de 58.672 millones de pesos de depósitos, los porcentajes eran: 43,7% para la banca extranjera, 41,3% para la pública y 15% para la privada nacional. Debe recordarse que desde los años 60 hasta la crisis de 1995, la participación habitual de la banca extranjera era de alrededor del 17% de los depósitos. Lejos estamos de Mariano Fraguero⁴⁰, para quién el crédito público es una atribución indelegable del Estado y uno de los pilares de la soberanía nacional.

Un cuarto desastre consiste en la enorme transferencia de ingresos efectuada a favor del sector financiero.

En la actualidad, los banqueros ejercen el poder, aunque sin la insolencia de los tiempos de la convertibilidad, ni tal vez las mismas libertades. De allí que conservar la conducción del Banco Central es considerado como un objetivo estratégico mayor. En medio del tembladeral político y económico, tengamos claro que no es posible encarar el cambio que la sociedad reclama con este sistema de Banco Central, independiente de la sociedad y fiel vasallo del sistema financiero local e internacional.

2. Las empresas privatizadas

Ya examinamos el significado económico de las privatizaciones como eje del modelo rentístico financiero. Ahora corresponde señalar la función de las empresas privatizadas como centros de poder económico y político; en especial, las rentas que captaron y que captan.

Las privatizaciones constituyeron una monumental transferencia de ingresos y de poder del Estado hacia un nuevo grupo económico dominante. Además, esos sectores avanzaron hacia el poder político por la doble vía del debilitamiento estatal y de su propio fortalecimiento. La compra de las empresas públicas se

⁴⁰ Mariano Fraguero, *Cuestiones Argentinas y Organización del Crédito*, Solar/Hachette, Buenos Aires, 1976, primera edición en 1850.

realizó a precios de remate y las utilidades generadas fueron enormes. Los nuevos dueños o concesionarios de servicios públicos y recursos naturales integran ahora la elite política.

Durante el gobierno Menem-Cavallo todas las empresas públicas sufrieron la privatización a precios muy baratos. Después, esas empresas obtuvieron ganancias enormes: en el periodo 1993-2000, las 200 mayores empresas ganaron 28.400 millones de dólares y de ellos más de 16.000 millones correspondieron a 26 empresas privatizadas (para que se advierta la magnitud: este conjunto de empresas ganó casi 5,5 millones de dólares por día y 231.000 dólares por hora). Entre 1993 y 2000, la tasa de ganancias del conjunto de las privatizadas fue de 10,4%; las vinculadas con las privatizaciones obtuvieron una tasa de 6,6%, y las no vinculadas de 1,1%.⁴¹ Las prestadoras de servicios públicos aplicaron una cláusula insólita de reajuste de acuerdo con la inflación de Estados Unidos y por esta sola negación al sistema jurídico argentino tuvieron beneficios por 9.000 millones de dólares desde que se privatizaron hasta el 2000.⁴²

En un estudio sobre el tema se estima que entre 1991 y 2001 las utilidades de las empresas prestadoras de servicios públicos superaron los 34.000 millones de dólares; es decir, que en diez años ganaron más que los 30.000 millones de dólares que invirtieron en la compra. La situación es más ventajosa aún si se considera que más de la mitad de las compras fueron financiadas con préstamos pagaderos con el giro de negocios de las compañías;⁴³ sin contar que gran parte de las empresas privatizadas fueron entregadas por títulos de deuda del gobierno cuya cotización era una cuarta o quinta parte del valor nominal y que a los efectos de la compra se consideraban al 100%. "Se puede concluir que el capital propio arriesgado por los compradores ya ha sido amortizado hace tiempo y en

⁴¹ Daniel Azpiazu y Martín Schorr, "Las privatizaciones argentina", *Privatizaciones y poder económico* (Daniel Azpiazu, compilador), Universidad Nacional de Quilmes/FLACSO/IDEP, Buenos Aires, págs. 181 y 182, de donde extraemos los datos mencionados.

⁴² Daniel Azpiazu, "Presentación", *Privatizaciones y poder económico, op. cit.*, pág. 12.

⁴³ Mabel Thwaites Rey y Pablo Maas, "Privatizadas: ganancias al por mayor", *Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur*, febrero de 2002.

tiempo record".⁴⁴ Los ejemplos son múltiples.⁴⁵ La empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS) ganó el 39,5% (con respecto a las ventas); dos años después, por la recesión, sus utilidades fueron sólo del 26,3%.

Otra forma de disimular ganancias y evadir impuestos consiste en pagar honorarios de administración a operadores técnicos que, en general, son las empresas que encabezan el consorcio. Así, en 2000, Telefónica de Argentina pagó 148 millones de dólares a su operador Telefónica de España; si se le suma la ganancia neta que figura en el balance, resulta una ganancia de 491 millones de dólares (16,6% sobre ventas). A su vez, en 2000 Telecom le pagó 130 millones de dólares a sus operadores técnicos France Telecom y Stet (Italia). Gas Natural BAN (Buenos Aires Norte), en 2000 facturó 450 millones de dólares y ganó 54 millones. Aguas Argentinas en 2000 pagó 18 millones de dólares a su casa matriz Suez Lyonnaise des Eaux por un contrato de control de gestión y transferencia de tecnología; ese año ganó 85 millones de dólares (el 16,5% de las ventas que se eleva al 20% si se consideran los "honorarios técnicos").⁴⁶ En síntesis, "les seguimos cambiando / oro por cuentas de vidrio/ y damos nuestras riquezas / por sus espejos sombríos", como canta Amparo Ochoa.

Por otra parte, al tener el dominio del poder político, las grandes empresas utilizan cuando necesitan el recurso de licuar sus deudas y hacer que sea el Estado quien cargue con ellas. Son muy neoliberales cuando hay que cobrar, pero en el momento de las pérdidas las socializan. Lo hicieron en 1982 durante la dictadura militar a través de los sucesivos seguros de cambio establecidos por los Presidentes del Banco Central Egidio Ianella, Domingo Cavallo y Julio González del Solar. Lo volvieron a hacer con la pesificación, como veremos más adelante, y ahora aspiran a conseguir un seguro de cambio como el que ya obtuvieron los bancos, o que se les autorice aumentos de tarifas para pagar deudas en el exterior. Lo que no dicen es que en lugar de invertir sus enormes ganancias en el país, las remesaron a sus

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Extraemos los ejemplos del citado artículo de Mabel Thwaites Rey y Pablo Maas.

casas matrices, las que con esa contrapartida les otorgaron préstamos, que entraron como deuda externa privada en dólares; ahora quieren que el Estado se haga cargo de esas deudas. Esto no es nuevo: varias de esas empresas compraron las empresas estatales con dinero prestado y presionan para que el Estado tome a su cargo la diferencia de cambio. Todo esto matizado con una evasión fiscal general que es tradicional.

3. Las empresas petroleras

Otro conglomerado que maneja la economía nacional es el de las empresas explotadoras de recursos naturales. El caso más relevante es el del petróleo, cuya empresa estatal –YPF, la mayor corporación de la Argentina- fue privatizada. El costo de extracción del barril de petróleo fue estimado en 2.6 dólares entre 1998 y 2000⁴⁷; sin embargo, Repsol (empresa española que compró a la estatal) lo vende en el mercado interno argentino al precio internacional, como si lo importara; en 2001 y 2002 ese precio varió entre 20 y 30 dólares. Repsol apropia de este modo y de manera integral la renta del recurso natural y obtiene ganancias extraordinarias. La CEPAL ha calculado que en 2000 la renta petrolera de Argentina (la diferencia entre el costo de producción local y el precio internacional) ascendió a 6.012 millones de dólares.⁴⁸ Como si esto fuera poco, la explotación de Repsol tiene como características la falta de exploración y el exceso de exportaciones en un país con sólo 9 años de reservas comprobadas.

Para completar, el Presidente Menem en diciembre de 1989 dictó el decreto 1589/89, por el cual las empresas petroleras pueden dejar en el extranjero el 70% de las divisas generadas por las exportaciones. Este decreto es incompatible con la ley de emergencia económica y los controles cambiarios, según lo sostuvo el Procurador del Tesoro; sin embargo, fue ratificado por el decreto 2703 publicado en el Boletín Oficial del 31 de diciembre de 2002. Significa 2.800 millones de dólares anuales.

⁴⁷ CEPAL, *La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2001*, Santiago de Chile, 2002, pág. 154.

⁴⁸ *Ibid.*

¿Qué quieren estas empresas ahora? Sobre todo, que no toquen sus privilegios y conservar así sus beneficios exorbitantes en perjuicio de la Nación y sus habitantes. Tras la devaluación, quisieran apropiarse la totalidad de la ganancia extraordinaria que tienen como exportadores, que cobran en dólares. Por eso se resisten a las retenciones a la exportación, tratan de presentarla como un costo extra y no como la recuperación por el Estado de una parte de la renta que le pertenece a los argentinos.

Recuadro 5

La corrupción

¿Qué significa la corrupción política? En términos generales, es el uso indebido del poder público para beneficios privados, el sacrificio del interés público en provecho de satisfacciones individuales⁴⁹.

Maquiavelo señaló que la corrupción terminal no es tanto la del individuo, sino la del Estado, cuando los sobornos se convierten en sistema. Comparó la historia de la República Romana con la turbulenta Italia del Renacimiento, y escribió que la corrupción puede adueñarse de un Estado o de un pueblo, y acarrea la pérdida de la libertad. Más aún, Maquiavelo señalaba que el reaseguro contra la corrupción es la igualdad entre los ciudadanos; el factor de corrupción son aquellos que no trabajan y viven de sus posesiones⁵⁰.

Para entender el funcionamiento de la corrupción, parece útil distinguir entre la corrupción "minorista" y "mayorista". La primera hace referencia a todo tipo de pagos a funcionarios menores, para evitar una pena o acelerar un trámite. El folclore de las administraciones públicas tiene un amplio muestrario y hasta una filosofía explicativa. En su inmoralidad, estas prácticas no son las más graves, a menos que

⁴⁹ *Enciclopedia of the social sciences*, The Macmillan Company, Nueva York, 1948, volumen III-IV, págs. 448 y 449

⁵⁰ Nicolas Machiavelo, *Discursos sobre la primera década de Tito Livio*, capítulo XVII.

entren en una "red de corrupción" en donde la "coima" es participada hacia arriba, a veces de acuerdo a tarifas preestablecidas, como en el caso de los contratos "con peaje" (con el desarrollo de la flexibilización laboral y de los créditos internacionales, es posible obtener contratos a condición de entregar un porcentaje al contratante). En este caso, la corrupción deja de ser un hecho aislado y adquiere institucionalidad. La situación es insostenible cuando la corrupción se transforma en un modo aceptado de regulación social: entramos en la corrupción mayorista. El ejemplo clásico son los contratos con el Estado. Estafar al Estado no es nuevo, ni siquiera es original de la Argentina; pero aquí adquiere la categoría de sistema.

Es desde este punto de vista que debe analizarse el contrabando de oro, la venta ilegal de armas, los sobornos sistematizados y en gran escala (como las del BancoNacion/IBM, o las de las privatizaciones), la evasión impositiva. La guinda de la torta es el lavado del dinero. Según surge de investigaciones realizadas por el Congreso argentino, tal es el caso del Citicorp Equity Investments (CEI, integrado por los directivos del Citibank John Reed y Richard Handley y el banquero Raúl Moneta, del Banco República y del Federal Bank), con activos superiores a los 5.000 millones de dólares, que invirtió 3.000 millones en la compra de medios de comunicación. Controló Altos Hornos Zapla, Transportadora Gas del Sur, Hotel Llao-Llao, Celulosa Puerto Piray, Papelera Alto Paraná y Frigorífico Rioplatense; fue accionista de Telefónica de Argentina, de Telecom Argentina y compró medios de comunicación (Azul TV, Telefé, Grupo América, Editorial Atlántida, CVN, Radio Continental, Radio La Red, Televisión Satelital Codificada, con participación en Torneos y Competencias).⁵¹

Este tipo de corrupción no es patrimonio del sector público. Mencionemos sólo que el sector privado es coautor de la corrupción política, puesto que sobornan a funcionarios para obtener ventajas que de otro modo no tendrían. Perjudican así a los competidores y a los consumidores. También encontramos casos de corrupción cuando los jefes de compra favorecen tal o cual contratación en contra de los

⁵¹ Informe de los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez, *Página 12*, Buenos Aires, 25 de febrero de 2001.

intereses de sus empresas, o cuando los gerentes se apropian de importantes ganancias a costa de los accionistas.

La naturaleza y la fenomenología de la corrupción sirven para explicar qué es y como funciona; pero el problema de fondo no radica en comportamientos aislados, sino en el establecimiento de prácticas corruptas como modo de regulación social. La instalación como sistema del funcionamiento social de la corrupción es contemporánea de la experiencia neoliberal.

Llegará el momento, para el *establishment* argentino, de decidir entre tres caminos: aceptar las reglas del juego democrático; continuar con el financiamiento de su hegemonía a través de la corrupción política; o liquidar a las democracias de baja intensidad, por demasiado costosas. Habrá que examinar si estas dos últimas opciones tienen margen y si los ciudadanos deciden dejar morir definitivamente a la República. Entonces sí, el cadáver apestará.

II Los dueños y los gerentes

1. El gobierno de los dueños

La renovación total de la vida política argentina es una necesidad nacional y un reclamo colectivo. Estamos en el marasmo del viejo sistema de renta y financiero, que se pudre de a poco y cada día vemos un signo más de su descomposición. Querellas pequeñas; saltimbanquis que legislan, decretan y juzgan; asuntos de Estado convertidos en negocio. Frente a esta epidemia apareció un reclamo obvio: que se vayan todos; que se evapore el personal político. Sin embargo, el saludable reemplazo de los grupos políticos dominantes no es suficiente: enfrentamos también, y sobre todo, un problema de estructura. Porque si la estructura permanece, vendrán otros gerentes para hacer lo mismo. El "que se vayan todos" obedece a un principio de salud mental: no ver más a las mismas caras; pero

adolece de una insuficiencia básica, porque los que se irían son los gerentes, no los dueños.

Distingamos. Como ya señalamos, el país está manejado por sus dueños: los bancos, las empresas privatizadas, los concesionarios de servicios públicos, los que captan la renta de los recursos naturales, el Fondo Monetario Internacional (FMI), los Estados Unidos. Ellos son los que mandan. Los gerentes son los que deciden en los tres poderes formales -ejecutivo, legislativo y judicial- del Estado maltrecho que tenemos; pero por definición obedecen a los patrones.

Estos gerentes gobiernan sobre la base de la alienación de la independencia en el plano internacional y sólo son los ejecutores de la voluntad de los dueños. En cuanto a la soberanía popular, los partidos políticos grandes, que deberían representarla, sólo son sobrevivientes estropeados de dos grandes frustraciones: el menemismo y el delarruismo; la mayoría de sus líderes sólo aspira a blanquearse para poder seguir con los negocios u ocupando cargos.

Si sólo se plantea que se vayan los gerentes, la situación no cambiará mucho. Incluso a los dueños no les interesa mantener a gerentes ineficientes y corruptos aunque dieron muestras de lealtad infinita. Si se van los gerentes y no ocurre más nada, los dueños pondrán a otros para que sigan defendiendo sus intereses. Es la base del discurso que limita el problema a la ética en términos de personas: pongamos gente honesta que todo mejorará. No es así. Porque la corrupción no es un efecto perverso del modelo, sino la instancia política necesaria para su reproducción en el tiempo. No se trata de poner gerentes éticos al frente del saqueo, sino de echar a los dueños.

2. La rapiña de los dueños

La corrupción grande es la de los dueños. Los gerentes -en connivencia- también hicieron lo suyo: negocios de las armas, del oro, IBM, coimas sistematizadas, porcentajes en todo tipo de contratos nacionales e internacionales. Estos y muchos otros fraudes muestran la creatividad de los mafiosos locales; pero el pillaje enorme,

con consecuencias macroeconómicas, está en los negocios de los dueños, como acabamos de reseñar.

¿Cómo sacarles el poder a los dueños de la Argentina? Creemos que hay que adecuar las acciones a las posibilidades reales, que son mucho mayores que lo que en general se cree. Primero no hay que permitirles que continúen con el vaciamiento; segundo, recuperar para la Nación todo lo que se pueda; y tercero, echarlos. Todo ello con la ley en la mano, lo que supone el poder político necesario para aplicarla. Veamos algunas pistas.

3. Cómo terminar con los dueños

La consigna elemental es "que se vayan los dueños"; pero cuidado: es como si después del asalto a un banco pidiéramos "que se vayan los ladrones". Antes de irse deben cumplirse varios requisitos. Primero, que devuelvan aquello de lo que se apropiaron de modo ilegal o abusivo, que paguen lo que deben (por ejemplo, los cánones) y salden sus cuentas con el Código Penal. Segundo, en el caso de los servicios públicos, que el Estado se haga cargo de ellos. Estos enunciados tan simples requieren para su ejecución de un gran poder político.

Lo primero es lograr que el Estado sea capaz de asumir sus funciones. La reforma del Estado no reside en suprimir cargos públicos o rebajar sueldos para que exista un superávit que permita pagar intereses de la deuda externa. Consiste en conquistar atribuciones y generar poder para conducir la Nación; que pueda arrebatarse el poder a los actuales dueños y sea apto para ejercerlo. En la visión lineal que predominó en otra época esto significaba la revolución: primero tomar el poder y después todo se arreglaría por añadidura. Ahora las condiciones son diferentes. La primera exigencia es la de generar poder, lo que puede hacerse desde el gobierno. Veamos qué quiere decir "que se vayan los dueños" con algunos ejemplos típicos.

El primer dueño que tiene que irse es el Fondo Monetario Internacional (FMI). No cumple con su función de dar liquidez a los bancos centrales de los países con dificultades de balance de pagos. Obra como agente de cobro de los acreedores internacionales, es el gendarme ejecutor de privatizaciones y ajustes, y el legitimador de las demandas de los intereses financieros locales. Que se vaya el FMI quiere decir aplicar las normas que utilizó Malasia, cuando rechazó sus exigencias y salió de la crisis por sus propios medios. Si se va, faltará un dueño y habrá muchos ajustes menos.

Otro dueño que debe irse es Repsol. Fue el beneficiario del mayor robo cometido en el país, que fue la privatización de YPF. Es obvio que esta riqueza natural debe recuperarse para la Nación. No se justifica que un recurso natural esencial y no renovable quede a merced del afán de lucro de una empresa extranjera, y torpe por añadidura.

Tanto la expropiación del recurso natural como la apropiación de Repsol son instrumentos tendientes a recuperar para el Estado nacional los yacimientos de hidrocarburos, su explotación y comercio exterior. La aplicación de estos u otros mecanismos dependerá a la relación de fuerzas existente, pero los objetivos son los mismos. Cuando se vayan estos dueños, ganaremos mucho con la racionalización de la explotación, con precios de combustibles fijados de acuerdo con los costos nacionales y con los importantes beneficios que quedarían para la Nación.

A su vez, los bancos privados y los extranjeros en particular –como analizamos- son dueños que han actuado como bombas de succión de ganancias. Fueron subvencionados con generosidad en épocas recesivas como ya señalamos, tuvieron beneficios extraordinarios en los períodos de auge y reciben inmediata protección del poder en los momentos de derrumbe.

Por otra parte, los bancos son los mayores propietarios de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), a cuyas andanzas ya nos referimos. Se deberá volver al régimen de reparto para todos, que establece la solidaridad entre

las generaciones, elemento constitutivo de la Nación. Quien desee una jubilación mayor, podrá contratarla a su cuenta y cargo con una compañía de seguros, como es el caso en muchos países capitalistas desarrollados.

Los servicios públicos ahora privatizados deberán volver a ser servicios públicos. Deben estar al servicio de la población y de la Nación, no de las empresas que los prestan: esto supone aplicar el principio que toda actividad económica que revista un carácter estratégico para el desarrollo debe ser de propiedad nacional.

En esta breve enumeración enunciamos algunos casos notorios de dueños que deben irse; por supuesto, y por desgracia, no son todos. La situación argentina llega a tal nivel de degradación que aplicar políticas racionales en el sentido del interés nacional parece un programa demasiado ambicioso. Sin embargo, en esto nos jugamos la existencia como Nación. De allí que el problema de fondo sea echar a los actuales y reales dueños, no sólo terminar con los gerentes del modelo.

Capítulo 4

Lo que no fue y lo que podría ser

"Ni la agricultura ni el comercio serían así en ningún caso suficientes a establecer la felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro la oficiosa industria; porque si todos los individuos de un país son a propósito para desempeñar aquellas dos primeras profesiones, ni ellas pueden sólidamente establecerse, ni presentar ventajas conocidas, si este ramo vivificador no entra a dar valor a las rudas producciones de la una, y materia y pábulo a la perenne rotación del otro: cosas ambas que cuando se hallan regularmente combinadas no dejarán de acarrear jamás la abundancia y la riqueza al pueblo que las desempeñe felizmente". (Manuel Belgrano, Correo de Comercio, Buenos Aires, 10 de marzo de 1810).

I

Las oportunidades perdidas

Después de la caída del gobierno de la Alianza, se abrió un panorama de cambios que fue desaprovechado. A continuación enumeraremos algunas de las oportunidades perdidas.

1. La devaluación

La historia argentina que comienza el 20 de diciembre de 2001 y dura hasta ahora es el relato de las oportunidades perdidas: una devaluación previsible pero mal hecha; una pesificación necesaria ejecutada de modo injusto y nocivo; la continuidad de la perversa economía del endeudamiento con caracteres de humillación; el encauzamiento de gruesas sumas de dinero hacia los bancos y las mayores empresas, que las evadieron. Lo peor es que esta pérdida de oportunidades no sólo frustró esperanzas, sino que llevó a una situación en la que la ejecución de políticas económicas justas y eficientes es mucho más difícil.

En primer lugar no existió –ni existe- un plan coherente. Las medidas económicas están sueltas, no se compatibilizan entre ellas ni responden a una concepción global. Más bien parecen actos aislados con tres orientaciones generales: “zafar”, favorecer al sector financiero y licuar las deudas de las grandes empresas. El único mecanismo para lograr los fines es continuar con el endeudamiento.

Ni el gobierno ni la oposición tienen un proyecto nacional; esta es una carencia mayor. Quien sí tiene un plan, por lo menos geopolítico, es Estados Unidos: quebrar a Argentina, ejecutar un golpe de Estado en Venezuela, dejar aislado a Brasil, que como buen país industrial, tiene una política independiente (por ejemplo, no quiere entrar al Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA). Ahora sólo examinaremos la forma en que se cumplieron los principales actos de gobierno.

La devaluación estaba inscrita en la lógica misma de la convertibilidad. El engaño de proclamar que cada peso, aun los depósitos, estaba garantizado con dólares, estalló cuando las reservas se evaporaron al ritmo de la evasión de capitales. También resultó falso el anuncio de que las “reformas estructurales” neoliberales generarían tales ganancias de competitividad que el déficit del balance de pagos desaparecería sin tocar el tipo de cambio. La sobrevaluación del peso sólo se podía mantener mientras los créditos siguieran llegando, pero nadie puede endeudarse al infinito, y menos un país del Tercer Mundo. Las salidas eran una devaluación constructiva o una devaluación catastrófica; un restablecimiento de precios relativos acompañado por una fuerte redistribución progresiva de ingresos hubiera permitido la reactivación. No es lo que se realizó: fue la primera ocasión perdida.

Una vez devaluado el peso, aumentaron las deudas en dólares medidas en pesos. Para repartir los costos de ese incremento vino la pesificación de las deudas, que estableció la paridad del peso con el dólar (1 a 1). Esa decisión era correcta para

los pequeños y medianos deudores, cuya tenencia de dólares en exterior es poco probable; así, era comprensible, si no necesario, establecer un límite a la pesificación de las deudas de empresas menores a 500.000 dólares, o las hipotecarias menores a 100.000 dólares, por ejemplo. Sin embargo, un poco de presión bastó para que el gobierno licuase las obligaciones de los grandes deudores, que casi con seguridad tenían activos en dólares y a quienes era inmoral en lo político e innecesario en lo económico subvencionar. El resultado es elocuente: los 80 principales grupos empresarios debían a los bancos locales 7.955 millones de dólares; al pesificar 1 a 1 y estar el dólar a 3,50 pesos, recibieron una subvención estatal de 19.887 millones de pesos.⁵² Es interesante notar que la pesificación indiscriminada y generalizada de las deudas a la tasa de 1 a 1 fue pedida por los propios bancos, de acuerdo con los principales deudores, según lo reveló el entonces Ministro de Economía Jorge Remes Lenicov. Es un sugestivo ejemplo de cómo funciona y defiende sus intereses el *establishment*, y de qué manera el Estado se pliega a éstos. Es interesante ver también que no todos son perjudicados en las crisis. En este caso perdieron los depositantes que tuvieron sus depósitos congelados o canjeados a pesos a la tasa de 1,40; y perdió el Estado que se hizo cargo del costo de la pesificación asimétrica compensando a los bancos. Es la segunda oportunidad perdida.

De paso, ya que estaban, el gobierno concedió a los bancos un seguro de cambio para que paguen las deudas en dólares en el exterior (contraídas no sólo por ellos, sino por sus subsidiarias y empresas asociadas). Cuando el gobierno decidió compensar a los banqueros por la pesificación asimétrica (los créditos a 1 peso=1 dólar; y los depósitos a 1,4 pesos por dólar), emitió para ellos 14.400 millones de pesos en bonos Boden 2007; pero ahora además les permite suscribir bonos públicos en dólares a 10 años pagando 1,40 pesos por dólar, utilizando los Boden que ya les ha otorgado; así, les regala a los banqueros 5.345 millones de dólares más.⁵³ Es la tercera oportunidad perdida.

⁵² Eduardo Basualdo, Claudio Lozano y Martín Schorr, "La transferencia económica de recursos a la cúpula económica durante la presidencia Duhalde", *Realidad Económica*, Buenos Aires, n° 186, febrero-marzo de 2002.

⁵³ Claudio Zlotnik, *Página 12*, Buenos Aires, 13 de diciembre de 2002.

2. La economía de endeudamiento

Desde 1976 la Argentina vivió en una economía de endeudamiento, que se agravó a partir de 1990; al mismo tiempo, avanzó la desindustrialización que desarticuló al sistema productivo. El régimen subsistió mientras hubo quien prestara; pero cuando cesaron los créditos vino el derrumbe. La inviabilidad del sistema de renta financiera hacía posible pasar a la hegemonía de la producción, que era viable en tanto y en cuanto se destinasen los recursos necesarios (que los hay, como veremos) al capital de trabajo y a la recuperación de la demanda interna a través de una fuerte redistribución del ingreso. Pero no. Permanecemos en la dependencia exigida por el FMI "porque si no, nos caemos del mundo". Es una moderna aplicación de lógica precolombina, cuando los navegantes creían que la tierra era plana y que en un momento caerían al vacío; por suerte, la tierra es esférica y existe la ley de gravedad.

Estas tesis son falsas y sostener la independencia de los países con respecto al FMI no es una utopía. En la crisis de 1997-1998 de Asia del Sudeste existieron dos tipos de orientaciones: Malasia, con su política independiente, que rechazó a los funcionarios del FMI y sus recetas, no sólo no se cayó del mapa sino que emergió con rapidez y vigor; mientras que la sumisa Indonesia se hundió más aún en una profunda recesión. Es ilustrativo recordar que los dos funcionarios del FMI que se encargaron de Indonesia son Mario Blejer y Anoop Singh. Lo sucedido en la Argentina desde la devaluación confirma que aceptar sin chistar las exigencias del FMI aumenta el deterioro económico, y que abandonar la senda de las absurdas condicionalidades, aún de modo involuntario, empujados por los acontecimientos, no nos hace caer del mundo. Esta es la cuarta ocasión perdida.

En síntesis, la convertibilidad se derrumbó por su propio peso, pero no salimos de manera ordenada, en el marco de un modelo alternativo. Las medidas que le pusieron un fin formal (el corralito, la moratoria parcial de la deuda, la devaluación), fueron tomadas por tres gobiernos diferentes simplemente porque

no tenían cómo evitarlas, pero por sí mismas no resolvieron ninguno de los problemas vigentes a fines de diciembre de 2001.

II

Lo que podría ser: la industrialización

1. Etapas industriales y regímenes políticos

En general, la forma de vivir de los habitantes de un país ha sido determinada por su modo de producir y por el monto de sus salarios dado el nivel de productividad. Ambos dependen del mayor o menor grado de mecanización, la calidad de la infraestructura y la calificación de la mano de obra: la industria que permite agregar valor a los bienes y servicios jerarquiza el sistema productivo, es clave en la incorporación y difusión del progreso técnico.

No se trata sólo de un negocio empresario, ni de la ampliación de mercados, ni de la transferencia de ingresos y de espacios económicos a empresarios locales o a las potencias dominantes. Es mucho más que eso: define cuáles serán los grupos económicos y sociales hegemónicos, así como los márgenes de acción que tiene la política; al mismo tiempo, en los países subdesarrollados, fija cuál será la potencia dominante y qué tipo de relaciones existirán con ella. En otras palabras, la industrialización de un país es un hecho político mayor. Este razonamiento dista mucho de ser original, pero nos hemos alejado tanto de las verdades elementales, que ahora parece olvidado y debe repetirse. Con este enfoque, veamos el desarrollo argentino (que también fue latinoamericano) de los últimos 100 años.⁵⁴

Desde fines del siglo XIX hasta el decenio de 1940 rigió el modelo de crecimiento hacia afuera, basado en la exportación de productos agrícolas. Su foco dinámico era la demanda internacional y las importaciones de manufacturas se financiaban con las exportaciones de productos básicos. En el plano político, los agentes principales

⁵⁴ En el análisis de este tema nos basamos en Alfredo Fernando Calcagno, *Cronología dos estilos de desenvolvimento na Argentina*, disponible en www.redeal.org, Programas Workshop RedeAL, julio de 2000. Allí se examinan estas etapas en detalle.

eran la oligarquía terrateniente tradicional (en otros países además era la minera) y el capital extranjero; ellos captaban la renta y configuraban el núcleo dominante. En ciertos casos debieron compartir el poder con grupos de una clase media que emergía; pero en general conservaban los puestos de comando de la economía y de la sociedad. En ese período, la industria consistía sobre todo en el procesamiento de productos agropecuarios, talleres de reparación de ferrocarriles, abastecimiento de la construcción. Sus principales ramas eran el azúcar, el quebracho, la cerveza, las carnes, los productos lácteos, los textiles y la indumentaria. El Estado promovió la inmigración, la educación, la infraestructura. Fue el régimen conservador.

Después vino el período de crecimiento hacia adentro (decenio de 1940 al de 1950), con el proceso de sustitución "fácil" de importaciones (es decir, la referida a productos de baja complejidad). Una oferta diversificada satisfacía la mayor parte de esas necesidades; la estructura de las exportaciones no cambió. Eran industrias livianas, que cubrían las necesidades de la mayoría de la población, incluso de la de menores ingresos. Tuvo un importante efecto multiplicador sobre el resto de los sectores económicos; lo que trajo una importante redistribución de ingresos, que favoreció sobre todo a los asalariados. La demanda interna suplantó a las exportaciones como el principal factor de impulso y existió una mayor dependencia de insumos importados. Esta etapa comenzó a agotarse, porque no hubo diversificación de las exportaciones y por la falta de integración vertical de la industria, que la hacía depender de la capacidad de importación de insumos.

Los grupos dominantes eran los asalariados organizados, es decir aquellos que utilizaban bienes de consumo masivo, y los empresarios nacionales que los producían, en su mayoría medianos y chicos. Por sus productores y consumidores, el sistema industrial daba las bases para un régimen democrático y popular. Se renovó en su totalidad la elite política, con la desaparición del conservadorismo y el radicalismo tradicionales, y el nacimiento del peronismo y el desarrollismo. Fue el primer peronismo.

La siguiente etapa fue la de industrialización "difícil" (decenios de 1960 a 1970), es decir aquella que produjo bienes más complejos destinados a un mercado interno cuya distribución del ingreso era más concentrada. Fue satisfecha una nueva demanda de grupos de poder adquisitivo medio y alto con la fabricación predominante de bienes de consumo durable, que iban desde los electrodomésticos hasta el automóvil. Tuvieron su auge las industrias metalmecánica, química y de insumos básicos. Existieron fuertes efectos multiplicadores hacia adelante (camino, construcción) y hacia atrás (materias primas e insumos), al tiempo que se generó una oferta propia de una sociedad de consumo de ingresos altos, en un país de ingresos medios. Hubo un cambio sustancial con respecto al período anterior de sustitución "fácil": los consumidores eran grupos de ingresos elevados y los productores eran empresas grandes o medianas (los empresarios chicos quedaron relegados a la subcontratación); comenzó a adquirir magnitud la inversión extranjera directa. En el plano político mandaban los empresarios grandes nacionales y las empresas multinacionales industriales. Este esquema era compatible con los gobiernos militares autoritarios.

En ambos períodos de industrialización ("fácil" y "difícil") se llegó a un importante desarrollo industrial, con un peso en el producto interno bruto que se aproximaba al de los países desarrollados. Tal vez una de las fortalezas (o debilidades) fue que se fabricaba de todo, en muchos casos a costos competitivos, en otros con problemas de escala, pero siempre bajo el amparo de la protección arancelaria. Así se alcanzó una capacidad técnica en equipos y mano de obra propia de países industriales. Por ejemplo, no sólo era mínimo el componente importado en la fabricación de automóviles, sino que se llegó a emprendimientos de alto nivel tecnológico. Así es como surgieron plantas de energía atómica, aviones, buques de mediano porte, plataformas petroleras, turbinas, barcas para navegación fluvial; aparecieron industrias de bienes de capital, de maquinaria agrícola, electrónica; hubo una importante industria química y petroquímica; se fabricaban trépanos para perforaciones, existió una siderurgia creativa, con los tubos para la industria petrolera; industrias de celulosa y papel; el desarrollo misilístico fue interrumpido por presión de Estados Unidos.

En 1976 se produjo un cambio drástico: el poder real pasó al sector de renta y financiero. Con la destrucción de gran parte del aparato productivo, en especial las industrias que generaban más valor agregado, tuvo mayor énfasis el desarrollo de las explotadoras de recursos naturales e insumos básicos. Entre 1976 y 2000 –como ya señalamos-, el producto interno bruto (PIB) generado por la industria cayó del 31,7% al 16,1% del PIB global.

2. ¿Cómo reindustrializar ahora?

Los regímenes políticos no nacen por generación espontánea. Son el resultado de las condiciones materiales y culturales vigentes, así como de las decisiones políticas. Cuesta determinar cuál es la causa y cuál la consecuencia, pero el hecho es que el sector productivo está tan en descomposición como la vida política argentina. La mentalidad rentística rige tanto la economía como la política. Todo emprendimiento económico desemboca en un beneficio financiero, y toda acción política en un negocio. ¿Cómo romper el círculo vicioso? ¿Hay que comenzar por lo político? ¿Debemos antes salir de la economía de renta? ¿O son dos caras de la misma moneda y lo económico y lo político deben atacarse al mismo tiempo?

Cualquiera sea la respuesta a las preguntas formuladas, es indudable que si queremos sobrevivir como Nación hay que enterrar a la renta como eje del sistema económico y pasar a la producción. Producción quiere decir agricultura, industria y servicios; pero por su poder de arrastre, de multiplicación y de innovación, el eje es la industria (que incluye la agroindustria y los servicios asociados). Ya mostramos cómo en el pasado existió una fuerte interacción entre producción industrial y regímenes políticos. El interrogante que se plantea ahora es: ¿qué esquema industrial nos conducirá a la Argentina productiva y participativa?, ¿qué empresarios pueden llevarlo a cabo?, ¿qué alianza política y económica sostendrá al nuevo régimen? ⁵⁵

⁵⁵ Véase Adolfo Dorfman, "La industrialización argentina en una sociedad de cambio", *Realidad Económica*, n° 112, Buenos Aires, noviembre-diciembre de 1992.

Es tal el grado de destrucción existente, que bien podemos encarar el problema como si se tratara de una Nación arrasada. Es necesario comenzar por el diseño de un plan económico global que privilegie una política industrial. La gran mayoría de las empresas industriales son medianas y pequeñas; allí radica también el grueso del empleo industrial. En general abastecen al mercado interno; algunas también exportan o subcontratan con empresas grandes.

La pérdida de poder adquisitivo y el auge importador de la convertibilidad afectaron con dureza a este tipo de emprendimientos; habrá que reconstruirlo y, junto con la obra pública, serán los dos instrumentos para terminar con el alto desempleo que soportamos ahora. Las condiciones indispensables para el surgimiento de este tipo de industria son el poder de compra de la población y el crédito a tasas razonables para inversiones elementales, en especial para capital de trabajo.

Otro tipo de industria es la llamada "cerebro-intensiva", que eleve la jerarquía del sistema productivo y aproveche la capacidad técnica y creativa de nuestros técnicos y empresarios. Hablamos de emprendimientos de alta tecnología, del tipo de los desarrollados por INVAP, la Comisión Nacional de Energía Atómica y, en otros tiempos, por Fabricaciones Militares y Aeronáuticas. No siempre se trata de empresas grandes; también en pequeñas empresas se puede trabajar con alta tecnología (por ejemplo, en la generación de *software* para computación). En general no ocupan mucha mano de obra, pero marcan y propagan un elevado nivel técnico y gerencial.

Este esquema puede objetarse desde el punto de vista práctico: visto que la mayor parte de la clase dirigente –que con excepciones incluye a la empresaria grande y a algunos sectores del Estado- es inepta y corrupta, ¿quién lo va a hacer. ¿Serán acaso nuestros grandes empresarios prebendarios? Es impensable que a la "patria financiera" y a la "patria contratista" les dé un ataque de honestidad y patriotismo; tampoco a muchos de los dirigentes del sector público. En cuanto a las empresas transnacionales, son nacionalistas pero del país de sus casas matrices; con respecto

a la honestidad, tienen poco que aprender de los mafiosos nativos. En síntesis: este grupo dirigente nacional y transnacional en su mayoría está consustanciado con la cultura de la renta y del "curro". ¿Entonces, qué?

3. ¿Una nueva modalidad productiva?

En la situación actual toda reforma importante debe hacerse desde el Estado. ¿Pero cómo utilizar un instrumento tan deteriorado? Para no esperar una reorganización total, que sería larga y dificultosa, pueden crearse agencias especializadas, que recluten personal honesto y capaz, que ejecuten las tareas sustantivas y urgentes. Puesto que es imposible reformar todo y rápido, pueden formarse "núcleos duros" de excelencia, con fuertes capacidades ejecutivas. Una de estas agencias debería instrumentar la reindustrialización.

En el ámbito de la pequeña y mediana empresa, los empresarios ya existen. Muchos de ellos fueron arruinados durante la convertibilidad y una multitud de fábricas cerraron; pero subsisten las aptitudes personales y este tipo de empresarios ha dado muestras de capacidad técnica y de creatividad. Además, pueden incorporarse una multitud de técnicos y profesionales, que actualmente están desocupados o trabajan en áreas muy alejadas de sus vocaciones.

Para que este planteo prospere hay que darle, sobre todo, mercado y crédito. El mercado vendrá con el aumento de la capacidad de compra que seguirá a la fuerte redistribución del ingreso y a la revitalización de la integración regional; el crédito será el resultado de una política bancaria diseñada por el Banco Central y los bancos públicos en función del plan de desarrollo y de los programas de emergencia. Asimismo, serán necesarias políticas arancelarias y cambiarias adecuadas. Además de ese desarrollo importante proyectado para las empresas pequeñas y medianas, ahora se está produciendo la recuperación de varias fábricas cerradas o en quiebra, por cooperativas formadas por sus antiguos trabajadores; el Movimiento Nacional de

Empresas Recuperadas calcula que hasta ahora así se resguardaron 10.000 puestos de trabajo.⁵⁶

El problema se complica con las empresas grandes. Ante todo, el plan industrial debería discriminar entre los emprendimientos según sean o no estratégicos. Si no lo son, quedarían librados a la iniciativa privada, a las leyes del mercado y a los controles normales. A su vez, las industrias estratégicas estarán sujetas a una intervención activa del Estado; tal es el caso de las organizaciones esenciales para el cumplimiento del plan. Habrá que discriminar entre aquellas reservadas al Estado, a sociedades mixtas o a la actividad privada; en este último caso corresponderá una tarea de control, de regulación y antimonopolio. En ciertos casos de industrias estratégicas, el Estado debe asumir para sí el liderazgo. La ausencia de una burguesía nacional puede y debe ser suplida por empresas estatales, mixtas, cooperativas o autogestionadas.

Creemos que este es el gran desafío productivo, que en caso de éxito tendrá importantes consecuencias en el plano político.

4. El escenario internacional

Un proceso de industrialización no sólo depende de la decisión nacional sino también de la inserción externa del país. Por supuesto, siempre está abierto el camino de la industrialización, aun con un ambiente externo hostil; pero si el mercado interno es chico, el aislamiento provocará dificultades de escala y de costos. Corremos el riesgo del estrangulamiento externo antes mencionado. En cambio, al participar en procesos de integración la situación es mucho más favorable, pues no se cae en los vicios de un supuesto mercado internacional abierto, donde rigen las ventajas comparativas y se deterioran los términos del intercambio. Veamos las perspectivas de la Argentina.

⁵⁶ Pablo Stancanelli, "Apropiarse de la fuente de trabajo", *Le Monde Diplomatique Ed. Cono Sur*, agosto de 2002.

En la historia, la experiencia de industrializar con el mercado interno como eje, ya la hizo la Argentina en los años 1940. Cualquier economista ortodoxo consultado en esa época hubiera afirmado que con el cierre de los mercados mundiales provocado por la guerra mundial, la Argentina iba a la catástrofe. En la realidad ocurrió todo lo contrario: el proceso de industrialización por sustitución de importaciones llevó al país a un grado de bienestar que no se repitió más. Este no es el caso ahora, entre otros motivos porque es mejor estar integrado a mercados regionales más amplios, donde exista la posibilidad de intercambio por ramas (manufactura por manufactura) y no por sectores (producto primario por manufactura).

Por eso la disyuntiva entre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) o el Mercosur es la alternativa de este momento. El tema ha sido debatido con amplitud.

⁵⁷ Ahora sólo deseamos señalar que el ALCA cancela las posibilidades de industrialización de América Latina y, en especial de la Argentina. De poco valdrá, en efecto, cualquier intento industrialista sobre la base de la distribución del ingreso y el crédito de capital de trabajo si las industrias nacionales no resisten el arancel cero con Estados Unidos. De hecho, con el ALCA la mayoría de las industrias que nos queden desaparecerán (como ya cerraron muchas durante la convertibilidad). Por otra parte, la oferta de reciprocidad con Estados Unidos es demasiado similar a la de los tratados con Inglaterra del siglo XIX, que permitían que los barcos ingleses navegaran los ríos internos de la Argentina, mientras la flota argentina (inexistente) podía remontar el Támesis.

En cambio, la opción industrializadora es la del Mercosur. Los cuatro países que lo integran constituyen un amplio mercado, dentro del cual podrán hacerse acuerdos por ramas. No es una utopía, sino un mercado en funcionamiento: la mayor parte de las exportaciones de manufacturas argentinas va a Brasil. Es una integración entre

⁵⁷ Véanse, entre otros trabajos, los publicados en *Le Monde Diplomatique*, Ed. Cono Sur: Carlos Gabetta, "El suicidio a través del ALCA", julio 2002; Luis Bilbao, "Estados Unidos y la Unión Europea confrontan en Sudamérica", abril 2001; Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, "¿Quieres ser ALCA?", abril 2001, y "Sudamérica es el camino", septiembre 2000; Dorvall Brunelle, "Estados Unidos quiere un mercado hemisférico bajo su control", abril 2001; Sylvie Paquerot y Emilie Revil, "¿Los recursos hídricos a remate?", abril 2001; Emil Sader, "Darle la palabra a los pueblos", abril 2001; Rodrigo Pizarro Gariazzo, "Chile, ingenuidad e ideología", abril 2001; Julio A. Louis, "Uruguay se distancia de sus socios", abril 2001.

iguales, en el sentido que ninguno de los países participantes pretende hegemonías políticas. Es una integración posible, porque los niveles de productividad son similares entre Argentina, Brasil y Uruguay; porque ambos países atraviesan situaciones sociales y planteos políticos semejantes.

Otro factor beneficioso del Mercosur serán las obras de infraestructura que se emprendan; sólo las comprometidas en las dos últimas reuniones de Presidentes de Sudamérica impulsarán a la industria por la doble vía del mejoramiento sustancial de los transportes y las comunicaciones, y de la producción industrial que implican las construcciones necesarias. Al estar en una misma franja de desarrollo, la elaboración y la instrumentación de políticas industriales conjuntas es posible y de mutuo provecho; por el contrario, nada nos queda esperar de quienes buscan mercados solventes y rentas financieras inmediatas, con el correlato del servilismo político.

Un factor central de la competitividad de la industria es precisamente contar con mercados nacionales importantes, que permiten alcanzar economías de escala y exportar. Hay que superar la falsa dicotomía entre mercado interno o mercado externo. De este modo, la Argentina tenderá a ganar competitividad sobre la base de trabajo calificado y bien remunerado, capaz de aplicar y difundir el progreso técnico y las formas modernas de producción, que constituyen la definición misma del desarrollo.

Bases para un plan alternativo

“La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social”.

Constitución Nacional de 1949, primera parte del art. 40.

“La política de combate a lo peor debe no sólo conservar o gerenciar, sino transformar: no se trata de concebir (utopía) o de mantener (conservadorismo) la mejor sociedad ideal posible, sino de transformar la sociedad real por la supresión o la reducción de lo peor”.

André Comte-Sponville, Valeur et vérité, Presses Universitaires de France, Paris, 1995, pág. 157.

I

¿Y ahora qué?

La catástrofe social tiene su correlato intelectual. Así es como los medios dominantes difunden sin mayor reflexión que no existe otra solución para la actual crisis que esperar el surgimiento de unos míticos inversores que llegarán a salvarnos, o que un día la Argentina recupere su capacidad de endeudamiento. De allí que las necesidades básicas insatisfechas, los sufrimientos y padecimientos de los ciudadanos sean vistos por el *establishment* no como el resultado de una política injusta y antinacional, aspectos que son hasta incapaces de concebir, sino como el duro, necesario y hasta virtuoso sacrificio que asegure la “governabilidad” y la “credibilidad” que nos exigen los organismos financieros internacionales.

Este disparate lógico y económico no sólo ha sido refutado por algunos algunos políticos y economistas argentinos, sino a escala internacional. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz calificó de “tonta” la premisa de que si Argentina

redujera su déficit, los inversores extranjeros regresarían al país, con el tan deseado financiamiento.⁵⁸

El estancamiento con inflación (la estanflación) no es una salida. Iremos a una tranquila muerte por inanición, o a un estallido que nadie puede saber cómo terminará. Sin transformaciones de fondo, el deterioro continuará, con graves consecuencias para la mayoría de la población, acaso soslayado por ayudas puntuales en los lugares y las situaciones más críticas. Pero es poco probable que sean suficientes para evitar un descontrol social que termine en represión.

Otro escenario probable es el de la disolución nacional. Una Nación entra en disolución por efecto de la fragmentación territorial, que es la característica más evidente, pero también por pérdida de soberanía expresada en la desaparición del Estado, el reemplazo del poder central por mafias más o menos localizadas, más o menos importantes pero operativas, en lugar y función de las instituciones democráticas. Aunque no es imposible, es poco probable que surjan la República de la Patagonia, de la Mesopotamia, de Cuyo, de Buenos Aires, del Centro o del Norte. Pero lo que ocurre no es desmembramiento sino disolución. En lo externo, el poder central obedece sin chistar a los mandatos de un poder extranjero y el FMI dicta nuestras leyes; en lo interno, el Presidente está subordinado al concilio de gobernadores de provincia, que actúa con el mejor estilo feudal. Sin control ni potestad sobre los recursos naturales (en primer lugar el petróleo); sin política monetaria que sirva al desarrollo; sin proyecto nacional, por causa de una izquierda que no entiende la cuestión nacional y una derecha que no entiende el problema del estado, nos encontramos en una situación donde la incertidumbre es la norma.

Frente a la fascinación del establishment, perdido en la contemplación de su propio ombligo, creemos que es fundamental demostrar que el régimen de renta financiera no es una calamidad celeste, sino una construcción política que sólo puede ser derrotada, evacuada y reemplazada por otra construcción política.

⁵⁸ *Washington Post*, Washington, 12 de mayo de 2002.

Estamos cansados de oír la mediática plegaria de impotentes que despliega la actual élite local acerca de la inexistencia de caminos alternativos, de su inviabilidad económica o de su impracticabilidad política. En los hechos, existen otras ideas, como El *Plan Fénix* elaborado por profesores de la Universidad de Buenos Aires, así como la *Propuesta sobre shock distributivo, autonomía nacional y democratización* preparada por la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), que constituyen excelentes ejemplos de alternativas viables que defienden el interés nacional. Es nuestra intención contribuir a ese saludable y urgente debate en los párrafos que siguen, desde una orientación filosófica hasta la instrumentación económica.

II

La lucha contra los pésimos como guía de la acción política

1. Optimismo y pesimismo

Para empezar, la acción política no puede ejecutarse a ciegas; en la base de una buena práctica está una teoría sólida. Veamos las raíces de las dos posiciones que confrontan, a escala internacional y nacional: el idealismo ingenuo y el realismo político.

Desde el punto de vista filosófico, el optimismo y el pesimismo constituyen dos actitudes opuestas frente a los problemas. El liberalismo adopta un "optimismo de segunda mano" o "segunda selección". Como lo señala el filósofo francés André Comte-Sponville,⁵⁹ en primera instancia tiene una visión pesimista del hombre y reconoce que es egoísta por naturaleza; pero en su elaboración teórica transforma ese pesimismo en optimismo: para ellos, el egoísmo, lejos de ser un defecto es una virtud, porque la suma de los egoísmos conduce al bienestar de todos. Así es como recopilan algunas de las tesis de Adam Smith, quien sostenía que cada individuo "es guiado por una mano invisible a realizar un fin que no está en sus intenciones; (...) mientras busca exclusivamente su interés personal,

⁵⁹ André Comte-Sponville, *op. cit.*, págs. 86 y ss.

(cada individuo) trabaja por el interés de la sociedad de manera mucho más eficaz que si ese fuera realmente su propósito”.⁶⁰

Tal es la tesis liberal clásica. El neoliberalismo ignora que Smith analizó y escribió sobre el mundo que conoció, es decir sobre el Reino Unido de fines del siglo XVIII. En ese sentido, el neoliberalismo empobrece el análisis profundo que realizó Smith, en particular sus observaciones críticas sobre el comportamiento empresario, para retener como si fueran atemporales ciertos conceptos que describen una realidad histórica. Así, los neoliberales proponen un ideal de equilibrio económico: óptimo, estable, eficiente, con los precios “justos” determinados con objetividad, en armonía.

En la práctica consiste en una apología del sistema vigente. Toda deficiencia es atribuída a desvíos de la pura y perfecta receta neoliberal basada en la primacía del mercado, que no falló, no falla ni fallará jamás. Si algo no funcionó, es por que faltó mercado, afirman. Sin embargo, existen áreas fundamentales para la vida en sociedad que el mercado ignora o con respecto a las cuales adolece de “fallas de mercado” bien conocidas: la justicia social; la desigual distribución de riqueza, de educación, de oportunidades reales y de poder de presión; la conservación del medio ambiente; el desarrollo regional; el equilibrio internacional; el desarrollo tecnológico; las políticas de mediano y largo plazo. Vemos aquí un rasgo típico de los fundamentalismos optimistas: para ellos, el neoliberalismo no sólo es el camino verdadero sino que es el único posible.

Frente a las tesis optimistas, que declaran que estamos en el mejor de los mundos posibles -o vamos hacia él-, André Comte-Sponville plantea una línea de acción política basada en la lucha contra lo “pésimo” de cada situación social. No intenta repetir la vieja e ineficiente consigna catastrofista de “cuanto peor, mejor”, que considera a la profundización de los males sociales, políticos y económicos como la antesala de una nueva política deseable. La experiencia ha

⁶⁰ Adam Smith, *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*, Fondo de Cultura Económica, México, 1997 (primera edición en inglés en 1776).

demostrado que la aplicación de esta política ha sido el preludio de situaciones y gobiernos aún peores que los atacados. No. De lo que se trata es de plantear una comprensión política para combatir lo pésimo existente en la sociedad.

Por supuesto, esta conceptualización no es inocente. Hay algo de revolución copernicana en dejar de perseguir lo mejor –la sociedad ideal, tan deseable, pero a la vez tan vaga, tan lejana–, para concentrarse en lo pésimo, que sí existe, nos rodea, y en exceso; no para fomentarlo ni ayudarlo en su crecimiento –ya le va bastante bien solo–, sino para combatirlo. Demos vuelta el orden de las categorías: el buen gobierno no es el que se ilusiona con alcanzar lo mejor, sino el que identifica primero a lo peor de una situación, para reducirlo o suprimirlo.

La diferencia entre lo peor y lo mejor “es que lo mejor no existe ni puede existir a corto ni a mediano plazo: lo mejor es objeto no de conocimiento sino de imaginación, no de voluntad sino de esperanza. Lo peor, al contrario existe (por desgracia, existe demasiado). Es objeto no de sueño sino de conocimiento, no de esperanza sino de voluntad. No se trata más de un posible, que sólo puedo imaginar, sino de una realidad, sobre la que puedo actuar. (...) Saber lo que queremos, es menos saber cuál sería la mejor sociedad posible (lo que quedaría en utopía) sino saber qué es lo peor en la sociedad real: saber lo que queremos, es primero saber lo que no queremos más, lo que queremos combatir, lo que queremos cambiar”.⁶¹

2. La lucha contra lo pésimo

El enfrentamiento de los pésimos tiene un hondo significado político: lejos de significar una política minimalista, de corto plazo y sin mayor trascendencia, implica una transformación profunda. Basta con llevar a sus últimas consecuencias el ataque a lo pésimo para chocar contra las estructuras de poder que lo sostienen. Por ejemplo, si se considera el pésimo de la desocupación, a poco andar se tropieza con la organización económica, con las políticas seguidas,

⁶¹ André Comte-Sponville, *op. cit.*, págs. 156 y 158.

con los ajustes aplicados (fiscal, monetario, de comercio exterior) y los ajustes desechados (oferta y demanda de trabajo, producción real y potencial distribución del ingreso más justa); con las políticas que atacan los efectos, contrapuestas a las que quieren modificar las causas. En definitiva, cuestiona la estructura del poder económico.

En la lucha contra lo pésimo no caben las abstracciones, sino que la acción nace a partir de realidades concretas en contra de las relaciones de poder que las sustentan. Así llegamos al conflicto con concepciones teóricas que confunden el interés superior y permanente del país y de los ciudadanos con el interés individual o corporativo.

El combate contra lo pésimo aparece como una salida posible para la crisis. Si los gobernantes no saben por donde empezar, resolver lo urgente con visión de futuro puede ser negocio (electoral). Si los gobernantes no lo vislumbran, entonces el negocio (político) de los gobernados será el de denunciar las políticas irreales, las medidas erradas, para forzar un cambio de política.

De este modo, en la aplicación de una política contra "lo pésimo", es posible identificar los males que existen y atacarlos según una escala de prioridades y un cuidadoso programa, de abajo hacia arriba. El desempleo, por ejemplo, tiene significado económico, se transmite a todo el ámbito social y puede llevar a uno de los mayores pésimos que es la sociedad dual, en la cual coexiste una enorme mayoría de pobres con una escasa minoría de muy ricos.

3. Conciencia social, voluntad política, poder político

Frente a la realidad actual se plantean las preguntas obvias: ¿qué hacer para derrotar a los pésimos?, ¿existen alternativas viables?, ¿cuáles pueden ser? Por supuesto, no se trata de frotar la lámpara y aparece el genio del modelo alternativo. No puede inventarse un estilo de desarrollo; vive de la acción y la construcción

cotidiana de los grupos sociales que lo apoyan, que ven reflejados en él sus valores y sus intereses.

La lucha contra los pésimos y en caso de éxito, la implantación de un nuevo modelo requiere conciencia social, voluntad política y poder político. Mientras la moral y la política continúen sometidas a la economía y en consecuencia sufran de una intensa anomia, poco se podrá hacer. Por eso la primera batalla es la que debe librarse para que la moral imponga límites a la política, y ambas a la economía. Ello significa un cambio profundo en la conciencia social. No es fácil, pero tampoco imposible. La tarea es más fácil cuando existen vicios insoportables, como por ejemplo la violencia en las dictaduras, el malestar económico en el neoliberalismo y la corrupción extrema de grupos dirigentes. Pensemos cuántas veces cambió la conciencia social argentina en el último medio siglo.

Pero para que un cambio en la conciencia social tenga efectos en la práctica, tiene que crear un cauce propio que exprese esa voluntad política. Sin ella, sólo quedarán remordimientos, pero no se incidirá sobre la realidad. La voluntad, en el contexto de la lucha contra lo pésimo, consiste en el deseo de restablecer la jerarquía social de los órdenes moral, político y económico. Una de las tareas básicas es la formación de una comunidad de voluntad y de valores que le sirva de sostén.

La conciencia social y la voluntad política son etapas en la construcción de poder, son requisitos necesarios pero no suficientes. El instrumento operativo es el poder político representado por el Estado. Sin esa herramienta, sería un espíritu sin cuerpo: quedaría girando en el vacío. Por eso es requisito indispensable un cambio en la estructura del poder político, que haga posible transformar el Estado en un instrumento apto para gobernar la sociedad y ejecutar una política que favorezca al interés nacional.

Tal es, a nuestro juicio, el planteo conceptual. En el plano operativo inmediato, para que un cambio sustancial sea posible son necesarios por lo menos otros tres requisitos: una renovación de la clase dirigente, un proyecto nacional y una

considerable acumulación de masa crítica. Sin conducción correcta, sin rumbo y sin pueblo no se llega a ninguna parte, y estaremos condenados a votar entre los responsables, los beneficiarios y los cómplices del saqueo. Por eso no se trata de elaborar un proyecto de escritorio, sino de esbozar un esquema para la discusión.

III

Requisitos para encarar la lucha contra lo pésimo

La lucha contra lo pésimo no es un emprendimiento abstracto sino un conjunto de batallas que hay que librar. Para poder encararlas son necesarios varios requisitos, entre los que sobresalen la recuperación del Estado, el cambio de la economía y la disponibilidad de recursos. Veamos cada uno de ellos.

1. Recuperación del Estado

Uno de las necesidades vitales de un nuevo modelo es la recuperación del Estado. Es un problema complejo, porque se trata de la herramienta fundamental para la instrumentación y el funcionamiento de la República. Un gobierno que cambie de modelo enfrentará la dificultad de modificar la realidad a la vez que transforma el instrumento de acción. No sería correcto idealizar el Estado del pasado y querer volver a él; ni tampoco pasarle una aplanadora al sector público, que ponga a la sociedad en manos de los grupos privados que liquidaron al Estado en beneficio propio. Tenemos como severa advertencia el caso de Rusia, donde la desaparición de la Unión Soviética no dejó lugar a la sociedad civil o liberó la fuerza productiva empresarial, sino que primó un conjunto de mafias.

Para empezar, el Estado carece de sentido como objetivo en sí mismo. Si se toma como un fin en sí, aparece el fenómeno de la burocracia, cuya sola finalidad es su reproducción en el tiempo, o el totalitarismo, si se confunde Estado con colectividad nacional. En el esquema de los órdenes sociales, el Estado es el elemento privilegiado de articulación entre los principios éticos y morales, el funcionamiento político y la conducción de la economía. En ese sentido, su esencia es instrumental a

las transformaciones necesarias, puesto que es el único capaz de contemplar las necesidades de todos los habitantes. La prueba de ello es su sistemática destrucción desde 1976, a través del endeudamiento para financiar la evasión de capitales y luego la privatización de las empresas públicas, el recorte sistemático de atribuciones, hasta la ofensiva contra el "costo político".

Existen, embrionarios u olvidados, sectores del Estado que aplican principios republicanos. Son experiencias que desde una delegación municipal, una intendencia, determinada repartición pública, personas y equipos ya sea peronistas, radicales, conservadores o socialistas, proyectan su pertenencia tradicional en el marco del interés nacional. Desarrollan su verdadera vocación de servicio público. Por supuesto, suelen ser de pequeña y mediana escala, no son conocidos por la opinión pública –acaso ignorados por no gastar en mercadeo- pero demuestran la existencia de un gran potencial humano en el seno del sector público. Resistentes a las vanas seducciones del modelo, son los elementos que pueden formar el nuevo "núcleo duro", profesional y comprometido, que permita crear el Estado instrumental para cambiar el modelo.

Estas reflexiones presiden a cualquier acción posible. No se trata de un problema de cantidad, como los analistas neoliberales privilegian cuando piensan que un Estado mínimo es el mejor Estado, sino de calidad; no se trata de un problema de tamaño, sino de coherencia con respecto al interés nacional y de eficiencia en la acción.

Desde el punto de vista del régimen republicano, el Estado actúa en tanto y en cuanto es el representante jurídico de la Nación. Esa representación sólo es legítima mediante elecciones; así lo entendía Arturo Enrique Sampay, al señalar que la ley electoral es tan importante como la Constitución. Del modo que sea electa la representación nacional puede variar en sustancia la pluralidad de opiniones, la posibilidad para los electores de demandar cuentas a sus elegidos y la capacidad del gobierno para gobernar. En ese sentido, diferentes experiencias históricas apuntan a las bondades de un sistema de ley electoral proporcional, cuando la sociedad ha resuelto sus problemas fundamentales; pero en tiempos de necesaria

transformación política, recuperación económica e integración social, parece que el escrutinio uninominal por circunscripciones, a una o dos vueltas, favorece la aparición de mayorías más claras. Este tipo de elecciones otorga a los gobiernos un instrumento legislativo más efectivo, a la vez que permite el ejercicio del disenso; su superioridad radica en la cercanía del candidato y de los electores, como se observa en Francia, y sobre todo en Gran Bretaña. Además, en épocas de degradación de los partidos políticos mayoritarios, permite una representación basada en la proximidad y en núcleos locales, en lugar de las anónimas y totalizantes "listas sábana". Si se desea que todas las opiniones estén representadas, es posible establecer una determinada proporción de los elegidos –un tercio o una cuarta parte- sea designado por representación proporcional.

En el funcionamiento cotidiano del Estado, observamos un fenómeno de vampirización. Hablamos del drenaje de recursos presupuestarios hacia determinadas áreas de la administración pública que se benefician con financiamientos especiales, muchas veces al precio de aumentar el endeudamiento externo. Estas unidades especiales, nacionales, provinciales y hasta municipales, acaso quisieron ser, en la mentalidad de sus creadores, ámbitos de administración de misión, con obligación de resultados, por sobre la administración de gestión, con mera obligación de medios. En la realidad, funcionaron durante la edad dorada del endeudamiento como la posibilidad de tener, muy bien pago, a gran parte del personal partidario. No siempre genuinos profesionales pudieron imponer criterios de acción pública por sobre condicionantes menores; en general, la acción se limita a criterios y procedimientos fijados por las entidades prestatarias, que no siempre van en el sentido de satisfacer el problema que originó estas unidades, ni garantizan un funcionamiento transparente. Este sistema derivó en la colonización de vastas áreas de la administración pública merced a los fondos de agencias financieras internacionales. Fueron un ejemplo de sobreabundancia de recursos con magros resultados; en ministerios casi derruidos con funcionarios poco remunerados, se logró la división en vez de la complementariedad. Nada asegura la continuidad de la acción una vez terminado el financiamiento: tenemos un Estado alquilado, con fecha de vencimiento. Para peor, era frecuente la corrupción de los "peajes", por la cual

el experto contratado cede una parte de su retribución a su superior o a su contraparte nacional.

Terminar con este drenaje y la casta de consultores que prohija, implica revalorizar los recursos humanos existentes en la función pública, promover el ascenso de quienes resistieron esta vampirización y amalgamar jóvenes profesionales que salgan de la Universidad pública con el plantel más veterano. Unir capacidad con compromiso parece el mejor camino para reorganizar el Estado como instrumento de transformación.

De este cambio no puede estar ausente la depuración de la justicia. Es inaceptable que existan jueces con estudios abiertos o que no puedan justificar su enriquecimiento; que en la Corte Suprema haya alineamientos políticos; que los jueces utilicen las sentencias para extorsionar a los otros dos poderes y obtener el rechazo del juicio político en su contra; que los atrasos en los trámites sean kafkianos, lo cual es particularmente penoso en los juicios penales y del trabajo, aquellos que afectan a la parte más humilde de la sociedad. Una vez más, el mensaje que llega a los habitantes es que el que pueda pagar tendrá buena justicia; el que no, no tendrá nada. Como en tantos otros sectores fundamentales de la acción pública, no faltan aquí ni los recursos necesarios, ni el capital humano. Falla la organización general de la justicia, no por fatalidad histórica sino por el conjunto de egoísmos personales y la falta de decisión política.

Tratamos apenas algunos aspectos del problema del Estado, y citamos sólo las elecciones, señalamos algún aspecto del funcionamiento de la administración, mencionamos la justicia. Pensamos que tal vez sean la punta del ovillo. Quedan los aspectos sociales, las relaciones exteriores, la defensa, entre tantos otros... Esta reflexión no trata de inventar una fórmula mágica que encierre en sí misma todas las soluciones imaginables; para eso están las abstractas cuando no esotéricas modelizaciones de los economistas neoliberales, con los resultados a la vista. Acaso ha llegado el momento de analizar qué resultados puede dar la aplicación del "principio republicano" de lucha contra lo pésimo al campo económico.

2. Cambio de la economía

Un pésimo mayor, que determina la crisis actual, es el predominio de la economía sobre la política y la ética; dentro del ámbito económico, es la hegemonía del sector financiero. Por ello, las reformas económicas están en el meollo del cambio de modelo. Los puntos de partida son el reemplazo de la economía de renta financiera por la economía de producción y una distribución del ingreso en gran escala entre los sectores de menores recursos. Lejos de ser contradictorios, son complementarios y se retroalimentan.

La primera necesidad es el abandono del modelo rentístico financiero que nos rige desde 1976. Implica el cambio en la forma de funcionamiento de la sociedad a la que nos referimos antes y el surgimiento de una nueva clase dirigente argentina. Estos objetivos podrían parecer ilusorios, si no fuera porque agoniza el modelo vigente al que sirven.

Para la restauración de la hegemonía del sector productivo, uno de los principales instrumentos es la reindustrialización y el desarrollo de servicios de alto valor agregado, como vimos en el capítulo 4. Uno de los elementos más importantes de esta opción es que está asociada al desarrollo de un mercado interno y otro subregional (Mercosur).

El tema del mercado interno nos lleva al segundo eje del nuevo modelo económico, que es la redistribución del ingreso. La actual distribución de la riqueza y el ingreso es muy regresiva. En 2001, el 10% más rico se quedaba con el 36 % del ingreso (en 1974 era el 28%) y el 30% más pobre recibía el 8% (en 1974 obtenía el 11%). Para peor, durante 2002, el poder adquisitivo de los salarios cayó en casi 24%, y los ingresos de los trabajadores "en negro" disminuyeron el 35%.⁶² Esto no sólo provoca desintegración social, sino que además distorsiona fuertemente el

⁶² Véase Ismael Bermúdez, *Clarín*, 5 de enero de 2003, sobre la base de la encuesta del INDEC de octubre de 2002.

funcionamiento de la economía y le hace perder dinamismo. En efecto, la concentración del ingreso lleva tanto a una fuerte evasión de capitales, como a un mayor consumo de productos importados (o con muchos componentes importados) y uno menor de bienes y servicios de primera necesidad, que el país puede producir con abundancia; es pues una de las razones del estrangulamiento externo en el que estamos; en la época de la convertibilidad se agregaba la sobrevaluación del peso. Tiene un efecto depresivo sobre la economía, al comprimir la demanda de masas crecientes de la población.

Uno de los dogmas del neoliberalismo lo ancla en la economía de la oferta: si alguien está capacitado, conseguirá trabajo; y si algo es producido, aparecerá el comprador. No se les pasa por la cabeza que además existe la economía de la demanda: aunque el empresario no pague salarios porque el trabajador viva del aire, aunque le regalen la maquinaria y el costo del dinero sea cero, nadie va a producir si nadie compra. Es necesario recuperar el consumo popular como un fin en sí mismo y como motor del crecimiento.

Las formas posibles de mejorar la distribución del ingreso son múltiples, y pueden ser combinadas entre sí. En primer lugar deben aumentarse de manera progresiva pero constante los bajos salarios para que recuperen y superen los niveles de 1976; al mismo tiempo es posible mejorar con rapidez el ingreso de los hogares si se amplía el número de sus integrantes que tienen empleo, más aún si se mejora la calidad de esos empleos (pasar de ser subempleado en un empleo de baja productividad y remuneración, a ser un empleado formal con mayor productividad). Del mismo modo, deberá aumentarse el "salario indirecto" y las transferencias, tales como las jubilaciones, los salarios públicos, el salario familiar, el subsidio por desempleo, los servicios de salud y educación.

Esta estrategia supone apoyar el crecimiento de sectores generadores de empleo, como la industria, la construcción, la obra pública y los servicios básicos, lo que

requiere otra política de crédito. Sobre esa base productiva, se generan nuevos empleos en servicios como el comercio y los servicios personales.⁶³

Otra lacra que ha degradado la actividad económica y que debe desaparecer es la corrupción, a la que nos referimos en el recuadro 4. Es otra cara de la injusticia social, que toma auge cuando aumenta la desigualdad en un país. En los casos que se la compruebe, deberán revisarse los actos jurídicos que adolecieran de ese vicio, para ajustarlos a la legalidad.

En síntesis, una fuerte redistribución del ingreso no sólo constituye una rehabilitación moral hacia los ciudadanos que más han sufrido con el modelo de 1976; es una necesidad política para concretar una nueva base de poder y es un requisito ineludible para asegurar el motor del futuro crecimiento.

3. ¿De dónde salen los recursos?

Una opinión generalizada sostiene que es necesario transformar en profundidad la realidad argentina, pero que no existen recursos para financiar los cambios necesarios. Esta no sólo es una afirmación de los voceros del *establishment* sino también de una masa de observadores conformistas, "incoloros, inodoros e insípidos". Esto es falso. Es una coartada para mantener la situación como está y, sobre todo, para que un grupo privilegiado siga captando beneficios y rentas.

A continuación examinaremos algunas fuentes de recursos. Enumeraremos, como simple indicación, algunos de los fondos que están disponibles para financiar el desarrollo económico y social, sobre la base de estudios realizados por distinguidos economistas, en particular por José Sbattella y el equipo del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos de La Plata (IEFE). Comencemos por una primera distinción: los recursos en divisas y en moneda nacional.

⁶³ La experiencia de crecimiento chileno entre mediados de los ochenta y mediados de los noventa nos brinda enseñanzas en ese sentido. Véase CEPAL, *Crecimiento económico y difusión social en Chile, 1986-1992*, Santiago de Chile, diciembre de 1994.

Las divisas

En un planteo normal, para obtener los recursos en divisas es necesario aumentar los ingresos disponibles y disminuir los pagos. En nuestro caso, además es fundamental que se limite de modo drástico y efectivo la evasión de capitales.

Ya terminó la época del ruinoso flujo de capitales especulativos y del endeudamiento sin límites; también disminuyó la inversión extranjera directa, que venía sobre todo a comprar empresas. Los ingresos de divisas provienen del saldo de comercio exterior, que en 2002 es de alrededor de 15.500 millones de dólares; estos fondos, sumados a los 10.000 millones de dólares de reservas, constituyen una masa crítica suficiente para encarar políticas alternativas. Por el lado de la reducción de los pagos, la moratoria de la deuda externa establece ya una rebaja importante; es de esperar que de la renegociación o de decisiones unilaterales surjan quitas sustanciales. De cualquier modo, se generan las divisas necesarias para financiar una primera etapa de reactivación y transformación. Lo esencial no es tanto conseguir divisas, como impedir que el *establishment* local e internacional las evada. En 2003, si existe una pequeña reactivación, el saldo será menor, pero importante. Si lo ha realizado hasta ahora, no significa que deba o pueda hacerlo en el futuro.

En los primeros nueve meses de 2002 hubo un superávit de comercio exterior de 12.856 millones de dólares, debido a la caída de las importaciones; pero la fuga de capitales, los pagos de deuda externa y el atesoramiento llegaron a 18.300 millones de dólares.⁶⁴ Evaporaron así no sólo el saldo del comercio exterior sino 5.530 millones de dólares de las reservas del Banco Central. Además de estas sumas, acumularon atrasos en la deuda externa por 7.688 millones de dólares. Mientras las divisas sean utilizadas para la evasión y la especulación, el problema no tiene solución; pero la cuestión no es la generación de divisas sino su utilización. Mientras

⁶⁴ Los pagos por amortización de deuda y salida de capitales fueron de 10.526 millones de dólares; por intereses salieron 4.802 millones (Ministerio de Economía, Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, *Estimaciones trimestrales del balance de pagos y de activos y pasivos en el exterior*, www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales).

mande el sector financiero, los dólares no se aplicarán a la producción. Sin embargo, con un cambio de modelo las divisas que se generen en adelante no tienen por qué seguir el mismo camino especulativo si se impide o dificulta la evasión, lo cual es una decisión política.

Esto en cuanto a la situación de emergencia inmediata. En el mediano plazo, el aumento de las exportaciones y la sustitución de importaciones planteará en otros términos los problemas del desarrollo y su financiamiento.

Los pesos

En lo que respecta a los gastos en pesos, en el mediano plazo habrá que modificar el sistema impositivo en su conjunto, con una progresividad que grave mucho más a los ingresos altos y rebaje o suprima los gravámenes a los menores ingresos. Pero mientras tanto, pueden obtenerse fuertes ingresos adicionales. Veamos.

En el presupuesto para 2003 figuran 13.195 millones de pesos como ingresos provenientes del comercio exterior, son las llamadas retenciones. Este ingreso puede llevarse hasta 40.500 millones al aplicar el método de las retenciones móviles que propone José Sbattella. En la actualidad las retenciones son cobradas sobre un tipo de cambio de 2 pesos por dólar y con una alícuota del 17%. Con las retenciones móviles se tributaría con respecto al tipo de cambio vigente, con retenciones del 100% sobre el margen que exceda los 2 pesos; por ejemplo, en septiembre de 2002, las exportaciones fueron de 2.251 millones de dólares, que por 2 pesos por dólar y el 17% de alícuota son 765 millones de pesos; con las retenciones móviles, como el tipo de cambio era de 3,64 pesos por dólar, la retención adicional sería de 3.691 millones de pesos (es decir, se aplica la diferencia entre 3,64 y 2 a los 2.251 millones de dólares de exportaciones). Con este método, en 2003 se recaudarían por retenciones 27.400 millones de pesos más.

Pero esto no es todo. Quien examina las estadísticas se sorprende cuando observa que después de la fuerte devaluación cayó el precio en dólares de las exportaciones;

sin embargo, existen explicaciones. La primera es la subfacturación, que permite a los exportadores reducir los impuestos y liquidar menos divisas; esto se logra mediante declaraciones por valores menores o por triangulación de operaciones. La diferencia se advierte con claridad en cuanto se comparan los precios internacionales con los declarados por los exportadores. Así puede comprobarse que por este mecanismo se evaden alrededor de 280 millones de dólares por año, lo cual significa 980 millones de pesos anuales.⁶⁵

Otro rubro importante es el del sistema de jubilaciones, al que ya nos referimos. La restitución de los aportes patronales que perciben las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones asciende a cerca de 4.000 millones de pesos.⁶⁶

Se considera también la conveniencia de gravar los ingresos provenientes del sector financiero. Un primer impuesto se aplicaría a los tenedores de la deuda pública del Gobierno Nacional que residen en la Argentina. En marzo de 2002 ese stock de deuda era del 39,2% del total y si se le aplicara un impuesto del 30% a la renta generada, se recaudarían 1.325 millones de dólares (4.637 millones de pesos a 3,5 pesos por dólar). Asimismo, un impuesto a las operaciones bursátiles, que incluya los montos operados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico y les aplique una alícuota del 1%, recaudaría 838 millones de pesos.

Estas son fuentes de nuevos recursos; pero además están los impuestos tradicionales, cuya recaudación puede aumentar de modo sustancial si se redujera la evasión. En efecto, Jose Sbattella ha calculado que la evasión real del IVA y del

⁶⁵ Véase Instituto de Estudios Fiscales y Económicos, *Informe IEFE*, n° 121, La Plata, septiembre de 2002, págs. 53 a 58

⁶⁶ Estimación de José Sbattella. Para el cálculo de los montos no ingresados a la Seguridad Social por la reducción de las contribuciones patronales, se tomó la masa salarial que constituye el monto imponible (sector privado) y se le aplicó una alícuota base; se obtuvo el monto de la recaudación sin rebaja; luego se comparó esa cifra con el monto con rebaja; se utilizaron los datos correspondiente a 2001.

impuesto a las ganancias fue en 2000 de alrededor de 32.000 millones de pesos.⁶⁷ En nuestro cálculo suponemos que es posible recuperar un tercio de esa suma.

El cuadro 2 resume los recursos adicionales disponibles para emprender el combate contra los pésimos a los que nos referimos. Los valores que referimos son indicativos, marcan un orden de magnitud, pero sobre todo muestran y demuestran los márgenes de maniobra existentes en la realidad.

Cuadro 2
Cálculo de recursos

1. Recursos en divisas, en millones de dólares:	
Superávit de comercio exterior	15.000
2. Recursos en moneda nacional adicionales a los establecidos en el presupuesto, en millones de pesos:	
Retenciones móviles sobre las exportaciones	27.000
Reforma del sistema de jubilaciones	4.900
Impuesto a los tenedores de deuda pública residentes en Argentina	4.600
Impuesto a las operaciones bursátiles	800
Una tercera parte de la evasión en IVA y ganancias	10.000
Evasión por subfacturación de exportaciones	980
Total recursos en moneda nacional	48.280

Fuente: Para las divisas, estimación propia; para los pesos, José Sbattella, sobre la base de datos del Ministerio de Economía.

Estas fuentes de ingresos son sólo una muestra: de hecho, también deberían aplicarse impuestos a las ganancias de capital logradas por la devaluación.

⁶⁷ El cálculo de Sbattella parte de la base que el año 2000 el consumo privado más el público fue de 230.000 millones de pesos; pero la recaudación del IVA fue de 18.500 millones de pesos, que con una alícuota del 21% indica 88.000 millones de ventas gravadas; ello significa que sólo pagó el 38% de las ventas, cuando en teoría está gravado todo el consumo. Lo que ocurre es que el consumidor pagó el impuesto en el precio de venta y quien se apropió el IVA lo transformó en su ganancia. Por impuesto a las ganancias se recaudaron 10.456 millones de pesos. Con estos datos se estima la evasión del IVA en 31.600 millones de pesos y la de ganancias en 18.000 millones. Si a esta magnitud se le restan los regímenes de excepciones, los esquemas de elusión y la ingeniería contable, la evasión real puede estimarse en alrededor de 32.000 millones de pesos anuales. (José Sbattella, "La evasión impositiva", *Le Monde Diplomatique Ed. Cono Sur*, octubre de 2001.

Para advertir con claridad el impacto de estos recursos genuinos basta recordar que en el presupuesto para 2003 los gastos corrientes totales de la administración central son de 37.600 millones de pesos, a los que se adicionan los gastos en seguridad social de 23.500 millones de pesos. Así es como comprobamos que no es cierto que no existan recursos. Lo que ocurre es que quienes se los llevan son los que manejan las leyes y velan por su ejecución, como vimos al referimos a los dueños y los gerentes en el capítulo 3, punto II.

IV

Los pésimos a combatir

En los párrafos precedentes analizamos los mayores males que provoca a la Argentina y a los argentinos el derrumbe del sistema neoliberal; estudiamos también la disponibilidad de recursos para financiar otro proyecto de país. Con la misma metodología, apuntamos algunos de los más graves pésimos sociales existentes así como algunos puntos de partida para su eliminación.

Primer pésimo a combatir: el hambre y la desocupación

El derecho de cada habitante a la alimentación y a un ingreso mínimo constituye sin duda la primer urgencia a solucionar, a cualquier precio. En un programa de emergencia, deben darse alimentos gratuitos y empleo mínimo; después, la solución de fondo surgirá de la reactivación de la economía.⁶⁸

En cuanto a los costos, la oficina de información acerca de los planes sociales de la Presidencia de la Nación (SIEMPRO) ha calculado que el costo anual de erradicar la pobreza es de 16.452 millones de pesos y el de la indigencia de 2.820 millones de

⁶⁸ Véase Mesa de Coyuntura del Instituto de Estudios y Formación de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), *Shock distributivo, autonomía nacional y democratización*, Buenos Aires, 2002.

pesos; estas cifras corresponden a mayo de 2002, por lo que deberán ajustarse por la inflación.⁶⁹

En el punto anterior hemos examinado las posibles fuentes de financiamiento. Si se demorara la recaudación, en un primer momento puede emitirse moneda. No toda emisión es inflacionaria: lo importante no es la cantidad de moneda nada más, es quién capta el dinero y en qué lo usa. En el esquema propuesto, los que reciben el dinero lo utilizan para comprar bienes de primera necesidad, que se producen en el país, y no para comprar dólares. El subsidio alimentario puede pagarse mediante el sistema de estampillas –como los utilizados en Estados Unidos y México- y no es inflacionario puesto que se entrega sólo a quiénes lo necesitan y no sirve más que para comprar alimentos.

Estos programas además de reparar una injusticia abominable, como existe capacidad productiva ociosa, pueden ser una palanca para reactivar la economía; entonces el mayor empleo hará desaparecer la pobreza y la indigencia y no serán necesarias las subvenciones. Bastará con salarios justos.

Segundo pésimo a combatir: 13,4 millones de personas no tienen protección médica

La actual situación de la salud pública en la Argentina es muy despareja. Dejando de lado las obras sociales y las empresas privadas, que prestan servicios cuestionables, el pésimo urgente es dar cobertura a 13,4 millones de personas que sólo tienen acceso al sector público. Para ello deberá reforzarse sustancialmente a los hospitales públicos provinciales y municipales, aumentando su cantidad y capacidad, y dotando de recursos a los dispensarios y las “salas periféricas” que en las municipalidades prestan atención médica primaria. La estructura del gasto público en salud en 1997 es la que figura en el cuadro 3:

⁶⁹ Presidencia de la Nación, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), *Deuda social para erradicar la pobreza y la indigencia*, op. cit.

Cuadro 3
Argentina: cobertura y gasto del sistema de salud según subsector, 1997 a/

Subsector	Cobertura (millones de habitantes)		Gasto (millones de pesos corrientes)	
Público	13,4	37,6%	5.263	23,1%
Privado	2,8	7,9%	9.146	40,1%
Obras sociales	19,4	54,5%	8.372	36,8%
Total	35,6	100,0%	22.781	100,0%

a/ El subsector público comprende la Nación, las provincias y los municipios; el subsector privado incluye los seguros privados (medicina prepaga y mutuales) y desembolsos directos; y las obras sociales son las nacionales, provinciales y otras.

Fuente: Ginés González García y Federico Tobar, *Más salud por el mismo dinero. Bases para la reforma del sistema de salud en Argentina*, Ediciones Isalud, Buenos Aires, segunda edición, 1999, págs. 197, 214 y 215.

A primera vista, es totalmente factible una duplicación del gasto del subsector público, junto con una política de control que mejore la asignación de recursos e impida –o por lo menos dificulte– la corrupción. Lo que corresponde entonces es jerarquizar y dotar de los recursos necesarios al hospital público y gratuito. Existe un amplio margen para reducir los gastos mediante el control de las compras en equipamiento, mantenimiento y hotelería hospitalaria; otro rubro susceptible de rebajas sustanciales es el precio de los productos farmacéuticos a utilizarse en los hospitales públicos (algunos hospitales municipales, como el de Olavarría, producen sus propios medicamentos básicos y abastecen a municipalidades vecinas, a muy bajos costos). En síntesis, un sector hospitalario público fuerte, eficiente, abierto y en expansión cambia los términos del problema y abre la posibilidad de discutir en serio y a fondo un nuevo sistema nacional de salud.

Tercer pésimo a combatir: no tienen seguridad social 9,3 millones de personas

De acuerdo con cifras del INDEC,⁷⁰ sobre una población económicamente activa de 15,5 millones de personas, sólo tienen seguridad social 6,2 millones (el 40%), como lo muestra el cuadro 4.

⁷⁰ Véase Ismael Bermúdez, *Clarín*, 2 de enero de 2003.

Cuadro 4
 Cobertura de seguridad social de la población económicamente activa, 2002
 (en millones de personas y porcentajes)

	Total	Sin seguridad social	Porcentajes
Población económicamente activa	15,5	9,3	60,0
Asalariados	8,7	3,5	40,0
Desocupados	2,5	2,5	100,0
Autónomos y monotributistas	4,3	3,3	77,0

Fuente: Ismael Bermúdez, *Clarín*, 2 de enero de 2003, sobre la base de INDEC, encuesta de octubre de 2002.

De estas cifras resulta que el 60% de la población activa no tiene jubilación, ni salarios familiar, ni atención médica de una obra social, ni seguros por accidentes del trabajo, ni indemnización por desempleo ni por despido.⁷¹ En especial se advierte que el 40% de los asalariados está “en negro”. Este es un escándalo inaceptable que debe terminar de inmediato. Una nueva política social deberá apoyarse en la expansión productiva, en la reasunción de las funciones sociales y económicas del Estado y en la eliminación de las AFJP.

Cuarto pésimo a combatir: la pérdida de la soberanía nacional

Debe recuperarse la soberanía nacional, tanto en el plano político como en el económico. En lo político, debe practicarse una política internacional independiente, sobre la base del fortalecimiento e institucionalización del Mercosur y la convergencia con la Comunidad Andina (CAN), que lleve al establecimiento de Sudamérica como unidad geopolítica. La alianza con Brasil y Venezuela debe ser el eje de esta política. En lo económico, es indispensable marcarle claros límites al FMI, que es un organismo internacional creado para solucionar dificultades de pagos de sus países miembros, pero que en modo alguno puede dictar políticas económicas internas. En este aspecto debe impulsarse la iniciativa de los Presidentes de los países de la Comunidad Andina y del Fondo Latinoamericano de Reservas que propusieron la constitución del Fondo Monetario Latinoamericano (FML);⁷² este FML

⁷¹ Ibid.

⁷² Como alternativa al FMI deberá crearse el Fondo Monetario Latinoamericano, que no es una utopía sino una iniciativa en plena acción. El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) es un organismo interestatal creado en 1978, constituido por Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela y abierto a la incorporación de los demás países latinoamericanos. Otorga créditos y garantías para el apoyo del balance de pagos, créditos de liquidez, financia

asumiría las funciones de un organismo monetario regional, operaría sobre la base de los recursos de los bancos centrales de la región sin imponer condicionalidades de política económica interna. Es indispensable fortalecer el Mercosur y bajo ninguna circunstancia aceptar la actual propuesta de ingresar al ALCA; de otro modo, quedaríamos totalmente subordinados y renunciaríamos a la industrialización. Además, deberán crearse empresas estatales supranacionales, del tipo de la propuesta por Venezuela para agrupar a las empresas petroleras públicas latinoamericanas (Petroamérica), o la Latin America Oil Co. entre Petrobras y Petróleos de Venezuela S.A.

Quinto pésimo a combatir: la disgregación nacional

La afirmación de la unidad nacional requiere un conjunto de acciones coordinadas. En primer lugar es esencial el fortalecimiento del poder central; ello implica tener un proyecto nacional y aplicarlo. El pésimo inmediato a combatir es la desaparición de los servicios públicos, que han pasado a ser negocio privado. Deberá revisarse caso por caso, para determinar en qué medida bastará con una regulación estricta, cuándo habrá que reestatizar y en qué situaciones estamos en presencia de dolo. En particular, deberán analizarse los manejos ilícitos, sobre todo en el proceso de privatizaciones y en la fijación de tarifas.

Dos casos límite son el de los ferrocarriles, que afecta a todo el territorio nacional; y el debilitamiento de la defensa nacional, que incumbe sobre todo a la Patagonia.

En materia de ferrocarriles, las empresas concesionarias no han cumplido con la mayor parte de sus obligaciones, por lo que el Estado nacional puede revertir las concesiones. Podría procederse como en la reciente renacionalización de los ferrocarriles británicos (octubre de 2001), que estatizó la infraestructura y creó una empresa social con fines no lucrativos (Railtrack), en cuya dirección participan los

exportaciones. En el plano político, la XII Cumbre Presidencial Andina de junio de 2000 propuso la transformación del FLAR en el Fondo Monetario Latinoamericano. Sería manejado por los países de la región, en función de sus necesidades e intereses. Lejos de caernos del mundo, nos afianzaríamos en una integración latinoamericana fortalecida.

productores (cooperativas, empresas industriales y agropecuarias), usuarios (pasajeros), industria ferroviaria, trabajadores, técnicos, municipios.⁷³ En el caso argentino, debería crearse una empresa nacional que sea titular de la infraestructura y determine la forma de operación del sistema. Por otra parte, la rehabilitación de los ferrocarriles demanda una gran cantidad de mano de obra, por lo que este sería uno de los principales planes para dar ocupación y para que trabajen los beneficiarios del ingreso mínimo.

Sexto pésimo a combatir: la desindustrialización

Los tres ejes de la reindustrialización son: primero, la redistribución del ingreso que otorgue poder de compra a la mayoría de la población; segundo una política explícita de industrialización que le otorgue todo el apoyo del Estado, desde los estímulos a la producción y el apoyo a la comercialización, hasta la creación de empresas estatales y mixtas; y tercero, la integración plena en el Mercosur.

Sobre la base de un mercado interno fuerte que reincorpore a los excluidos es posible desarrollar economías de escala que aumentan la productividad y permiten mejoras de salarios; debe abandonarse la ilusión que con salarios bajos somos más competitivos. Estamos en buenas condiciones para aprovechar la capacidad ociosa existente en varias ramas industriales e impulsar un fuerte proceso de sustitución de importaciones. Sobre la base del mercado interno y del comercio administrado con Brasil, es posible rehacer importantes ramas industriales (sobre todo porque ha desaparecido la subvención a las importaciones que significaba el tipo de cambio sobrevaluado).

Es preciso volver a introducir el crédito de capital de trabajo, para financiar la reactivación. La emisión de moneda de crédito no es inflacionaria si aumenta la oferta de bienes. Se pueden abrir líneas de crédito con ese fin en los bancos oficiales y en los bancos privados que acepten las condiciones de esos préstamos, y que

⁷³ Véase Félix Herrero y Elido Veschi, "Ferrocarriles en vía muerta", *Le Monde Diplomatique*, edición Cono Sur, febrero de 2002.

garanticen su uso productivo. Es posible prefinanciar exportaciones por esa misma vía.

Séptimo pésimo a combatir: la hegemonía del sector financiero

El paso de una economía rentístico financiera a otra de producción requiere la eliminación de los ejes del poder financiero. Debe dictarse una nueva ley de entidades financieras, que implante el crédito como servicio público y establezca varias pautas fundamentales. Primero, que desaparezca la "autonomía" falaz del Banco Central; no es posible que el sector financiero disponga del reducto donde se elabora una parte fundamental de la política económica, con independencia del poder político (véase el recuadro 4). Segundo, eliminar la renta extraordinaria que capta el sector financiero por encima de los márgenes normales de intermediación (deberán regularse las tasas que los bancos pagan por los depósitos y cobran por los préstamos, y las comisiones). Tercero, suprimir sus negocios abusivos (por ejemplo, el seguro de cambio a cargo del Estado para pagar deudas externas). Cuarto, en el caso particular de los depósitos bancarios, deben responder con sus recursos y los de sus casas matrices, o emitir bonos respaldados por los bancos. Quinto, deberán capitalizarse los bancos públicos. Sexto, los bancos públicos y privados deberán ajustarse a la política crediticia que fije el Banco Central. Séptimo, los únicos bancos comerciales (con capacidad de recoger depósitos) serán los estatales y los cooperativos; los bancos privados nacionales y extranjeros funcionarán sólo como bancos de inversión.

Octavo pésimo a combatir: la jubilación por capitalización

Se volverá al régimen de jubilaciones de reparto; la opción voluntaria de capitalización se dejaría sólo para quienes quieran mejorar su jubilación por encima de la de reparto. Esto permitirá terminar con un sistema irracional, que desfinanció al sector público sin aumentar el ahorro nacional ni mejorar las perspectivas de una mejor jubilación para los aportantes. Sólo sirvió para que las Administradoras de

Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) cobren suntuosas comisiones y el sector financiero maneje una de las mayores cajas del país.

Noveno pésimo a combatir: el sistema fiscal injusto e ineficiente

La reforma fiscal consiste en aumentar el peso relativo de los impuestos directos, sobre los ingresos y el patrimonio, en relación a los impuestos indirectos sobre el consumo y la producción. Se rebajará sustancialmente la carga impositiva de los grupos de ingresos medios y bajos (se logra en buena parte si se cobra una tasa del IVA que sea menor y selectiva); en los impuestos a las ganancias y al patrimonio podrían suprimirse o bajarse los impuestos a pagar por el 80% de los contribuyentes de menores ingresos y patrimonio, y concentrarse la carga fiscal y la vigilancia en el 20% más rico.

Décimo pésimo a combatir: la apropiación privada de la renta de los recursos naturales

La renta de los recursos naturales debe ser captada por el Estado. La principal renta actual es la del petróleo. ¿Cómo reconquistarla? Primero, el Estado nacional debe reservarse la propiedad de los yacimientos, la explotación y el comercio exterior de los hidrocarburos. Para ello se creará la empresa nacional de hidrocarburos, con el Estado nacional como único accionista, que retome las actividades de YPF.

Con respecto a Repsol, la solución frontal, la más rápida, es la expropiación; aquí habría que discutir el tema de la indemnización, si hubiera –como parece probable– beneficios ilegales y abusivos. Otra posibilidad, que generaría menos pleitos judiciales, es la recuperación de lo obtenido de modo ilícito por Repsol y la transferencia de los activos así rescatados a una nueva empresa estatal de hidrocarburos a crearse. Repsol ha recibido de modo ilegal concesiones y permisos que exceden el número que establece la ley de hidrocarburos vigente; tiene áreas otorgadas sin licitaciones, como los contratos de explotación reconvertidos en concesiones; goza de prórrogas ilegales sin licitaciones y sin constancia del cumplimiento de las obligaciones de la concesión; y áreas centrales no constituidas

como sociedades mixtas, según lo establecido en la ley de reformas del Estado; si se revirtiera esa situación, el Estado podría recuperar más de la mitad de las áreas. Si se declarara la nulidad de esas concesiones prohibidas, se las transfiriera a la nueva entidad estatal y Repsol debiera indemnizar por sus ganancias ilegales, la nueva empresa estatal tendría áreas y patrimonio como para funcionar de modo adecuado. Mientras tanto, un nuevo régimen fiscal captaría la renta generada.⁷⁴

Undécimo pésimo a combatir: las cargas de la deuda externa y la evasión de capitales

No debe pagarse deuda externa mientras gran parte de la población tenga necesidades básicas insatisfechas. Después, debe negociarse sobre la base del planteo jurídico de la ilegalidad (en especial la usura), fuertes quitas de capital e intereses y recompra de bonos con muy baja cotización. Cuando corresponda, deben instrumentarse acciones unilaterales. Se arreglará el pago de lo que realmente se debe, de modo que recaiga sobre los beneficiarios de la deuda, en especial los evasores de capitales. A los acreedores residentes en la Argentina, si correspondiera el pago, se les debe pagar en pesos como corolario de la pesificación 1 a 1 de las deudas.

Debe impedirse la evasión de capitales, que de acuerdo con cifras oficiales fue de 15.600 millones de dólares en 2001 y de 8.600 millones en los primeros seis meses de 2002 (véase el capítulo 2).. A tal efecto, el mantenimiento del control de cambios y de los movimientos de capital es una medida elemental para impedir el vaciamiento del país.

⁷⁴ El tema ha sido estudiado en profundidad por Gustavo A. Calleja, *Hidrocarburos: lecciones y análisis de las experiencias desreguladoras y privatizadoras*, Buenos Aires, marzo de 2002 (inédito); y Félix Herrero, "El subsuelo argentino: tierra de contradicciones", en Carlos Gabetta, *La debacle de Argentina*, Icaria Antrazyt, Barcelona, 2002.

Décimo segundo pésimo a combatir: la falta de recursos y desarticulación de la educación y la investigación científica

La educación y la investigación científica son dos ejes de la construcción de un país. La instrucción primaria masiva fue uno de los factores estructurantes de la unidad nacional; después la educación media marcó el nivel cultural de la Argentina; y de la universitaria salieron los grupos dirigentes. La actual crisis la afecta de modo decisivo, no sólo en cuanto a la decadencia en la formación sino también en la pérdida de valores.

La primer lucha contra ese pésimo consiste en infundir un ideal educativo, que tienda a que cada uno pueda desarrollar sus aptitudes intelectuales y humanas y tenga acceso a la cultura; a la vez que obtenga las calificaciones necesarias para insertarse de modo adecuado en el sistema productivo; todo ello dentro del desarrollo del conjunto de la sociedad.

La segunda lucha se refiere a los recursos de los que disponga. La actual asignación de fondos es la que figura en el cuadro 4.

Cuadro 4
Argentina: gasto público en educación, cultura ciencia y técnica, 1991 y 2000
(en porcentaje del PBI)

	Total		Gobierno nacional		Gobiernos provinciales		Municipalidades	
	1991	2000	1991	2000	1991	2000	1991	2000
Total	3,62	4,90	1,30	0,98	2,24	3,81	0,08	0,12
Educación básica	2,54	3,27	0,57	0,05	1,89	3,10	0,08	0,12
Educación superior y Universitaria	0,54	0,92	0,45	0,67	0,09	0,25	-	-
Ciencia y técnica	0,24	0,20	0,23	0,19	0,01	0,01	-	-
Cultura	0,10	0,12	0,03	0,05	0,07	0,07	-	-
Educación y cultura sin Discriminar	0,21	0,38	0,03	0,01	0,18	0,37	-	-

Fuente: Ministerio de Economía, Secretaría de Política Económica, Dirección de Gastos Sociales Consolidados.

En un estudio realizado por la CEPAL y la UNESCO se propone complementar los actuales recursos para, por una parte, fortalecer la cohesión social, el acceso de la educación, la cultura y la participación; y por la otra, jerarquizar el aparato productivo.⁷⁵ En ese estudio se propone adicionar a los gastos previstos, otros destinados a: acceso universal a una educación básica y media de buena calidad (0,4% del PBI), programas compensatorios focalizados (1,0%), educación básica de adultos (0,1%%), programas de capacitación en empresas (0,5%), programas de capacitación para sectores desaventajados (0,7%), fomento de la innovación y creatividad (0,5%), instrumentos para una gestión responsable (0,1%), reajuste de los sueldos del magisterio (0,6%). En total se trataría de agregar a los gastos actuales, recursos equivalentes al 3,9% del PBI para financiar una reforma educativa sustantiva. Señalamos este ejemplo, no como una propuesta concreta sino como un ejemplo del tipo de plan que es posible estructurar.

Décimo tercer pésimo a combatir: la degradación de las economías regionales

Uno de los peores efectos del modelo de renta y financiero es la desarticulación de la vida regional. Se dañaron los sistemas de transporte con la desaparición de los ferrocarriles; se empobrecieron las poblaciones del interior; se arruinaron muchas economías regionales. Corresponde ahora poner en funcionamiento una economía de producción en las provincias. Ello supone volver a darles capacidad de compra a sus habitantes; reindustrializar; comunicar de modo adecuado a todas las regiones; impulsar obras públicas de importancia (por ejemplo, el desarrollo de la cuenca del Río Bermejo); instrumentar programas de forestación y de mantenimiento de la infraestructura.

⁷⁵ CEPAL-UNESCO, *Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad*, Santiago de Chile, 1992.

Décimo cuarto pésimo a combatir: la defección de los partidos políticos tradicionales; la falta de sentido nacional, la ineficiencia y la corrupción de gran parte de la clase política

Los partidos políticos tradicionales se han transformado en una corporación para la defensa del sistema de renta y financiero que ahoga al país y de sus beneficiarios. Compiten para ser gerentes de lo mismo. En términos históricos están terminados. Es fundamental entonces la creación de una nueva fuerza política que represente a la Nación y defienda el interés popular.

Los defectos fundamentales de los que adolece la mayor parte de la clase política argentina deben combatirse mediante una diferente base de reclutamiento del personal político y de llegada a los cargos públicos en los tres poderes. Una de las bases de esta selección es el cambio del modo de elección legislativa, que debería ser la uninominal por circunscripciones, tal vez con un porcentaje del 25 o 30% de representación proporcional; de tal modo existiría la mayoría necesaria para gobernar, cada uno tendría su propio diputado (sería el fin de las listas sábana) y al mismo tiempo todas las opiniones serían escuchadas.

Décimo quinto pésimo a combatir: la falta de una clase empresaria capaz

Un problema que se plantea en los muchos países subdesarrollados capitalistas es la escasez de empresarios; ellos son en teoría quienes deben gestionar la economía, pero en demasiados casos carecen de las aptitudes gerenciales, de la visión de mediano plazo y de la percepción del interés nacional (al cual de todos modos ellos están ligados, aunque lo ignoren). Dura tarea la de hacer capitalismo sin capitalistas.

Aquí deben comenzar a distinguirse las diferentes situaciones. En primer lugar están las empresas grandes y dentro de ellas las estratégicas. Varias han sido privatizadas y compradas en general por empresas transnacionales; deberán volver al control nacional bajo la órbita del Estado. Las empresas grandes no estratégicas quedarán

sujetas a los controles normales, dentro de la iniciativa privada. Las empresas medianas y pequeñas serán apoyadas en su acceso al crédito (a tasas normales), a la tecnología y a la comercialización interna y externa; este apoyo será especial en los casos de las empresas recuperadas. La falta de una burguesía nacional deberá suplirse con la conjunción de pequeños y medianos empresarios, cooperativas y empresas recuperadas, y sobre todo con empresas productivas mixtas o estatales.

V

Tres reflexiones finales

La primera reflexión consiste en comprender que el modelo se encuentra en fase terminal, aún y sobre todo si tomamos en cuenta las variables que manejan los neoliberales. Si el sistema político sigue siendo un reducto del poder rentístico financiero internacional y nacional, nada podrá construirse. El requisito esencial es, pues, expulsar del poder al conglomerado que hoy lo maneja. Mientras el excedente económico generado por la sociedad sea apropiado por ese grupo y destinado a otros fines que la acumulación productiva y el bienestar general, no habrá horizonte visible. Depende de nosotros que las elites económicas, incompetentes y hoy dominantes, no arrastren a la Nación junto con ellos.

La segunda se refiere a la mayoría de la clase política argentina a nivel dirigencial. No se dan cuenta de la gravedad de la crisis. Sin la más mínima ambición nacional y sin ninguna virtud ciudadana desertan la discusión para chequear las últimas encuestas y presentarse como los mejores gerentes del modelo neoliberal. Proponen algunos cambios menores que no superan la anécdota.

La tercera es la inexistencia, hasta el día de hoy, de un instrumento político transformador. La Argentina vive una situación donde existe la posibilidad de encauzar las energías políticas, económicas y sociales en un nuevo proyecto que liquide el sistema de renta. Pero también pueden surgir viejos demonios bajo nuevas formas, que traten de imponer por todos los medios la reproducción de la renta.

Existen centenares de grupos de discusión en toda la Argentina que, lejos de las estructuras partidarias o sindicales tradicionales, se reúnen para discutir sobre los problemas del país, sin distinciones de partidos o sectores. Les falta articularse en torno a un proyecto, de un nuevo equipo, de un conjunto de valores que los represente y los federe. De la tensión entre las inercias personales o políticas y la urgencia de los problemas puede surgir un nuevo cauce político. Es decir, un partido político, un movimiento social, poco importa el nombre, pero no pueden existir equívocos en la función, que es recuperar el Estado, y en el objetivo que es viabilizar la Nación.

Después de todo, no se trata más que de recuperar la propia historia. Si la Argentina retrocede en el tiempo –no hablemos de 1945 o 1916- a una situación colonial, al menos sabremos qué hacer. La Revolución de Mayo empezó en los municipios con Cabildos Abiertos y un puñado de ciudadanos dispuestos a hacer política por mano propia. También puede suceder, porque no hay nada escrito en el cielo de la Historia, que la globalización, el ALCA o alguna otra catástrofe se lleven lo que queda de nuestra sociedad. Hay países que desaparecen.

Pero, como decía Sénancour, allá lejos y hace tiempo: "Si la nada ha de esperarnos, actuemos de modo tal que sea una injusticia".⁷⁶

⁷⁶ Étienne Pivert de Sénancour, *Obermann*, Paris, 1804.